



**UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.
FACULTAD DE HUMANIDADES.
PROGRAMA DE DERECHO.**

**ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO DE LA TORTURA Y TRATOS O PENAS
CRUELES EN COLOMBIA SEGÚN LOS ESTÁNDARES DEL DERECHO
INTERNACIONAL.**

**CARMEN ELENA ROMERO RODRIGUEZ
ANA ISABEL OROZCO CONTRERAS**

2015.

**ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO DE LA TORTURA Y TRATOS O PENAS
CRUELES EN COLOMBIA SEGÚN LOS ESTÁNDARES DEL DERECHO
INTERNACIONAL.**

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE ABOGADO.

**CARMEN ELENA ROMERO RODRIGUEZ
ANA ISABEL OROZCO CONTRERAS
Autoras.**

**ALFONSO LÓPEZ CARRASCAL.
Abogado.
Director.**

**ROSANA LIZCANO CABALLERO.
Abogada.
Co-Director.**

**UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.
FACULTAD DE HUMANIDADES.
PROGRAMA DE DERECHO.
SANTA MARTA.
2015.**

NOTA DE ACEPTACIÓN.

FIRMA DE DIRECTOR.

FIRMA DE CO-DIRECTOR

FIRMA DE JURADO.

FIRMA DE JURADO.

Gracias

A Dios por sus bendiciones

A nuestros familiares por su amor

*A nuestros profesores por todas sus enseñanzas y a nuestros
amigos por la compañía en esta experiencia maravillosa.*

A nuestro Director y Codirectora
A nuestro Decano y Director de programa, por
Toda la colaboración brindada.

Mil Gracias.

TABLA DE CONTENIDO.

	Pág.
RESUMEN.	8
INTRODUCCIÓN.	9
METODOLOGIA.	12
1. NORMATIVIDAD INTERNACIONAL ACERCA DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS Y PENAS CRUELES.	13
1.1. Antecedentes.	13
1.2. Contexto Actual De La Tortura Y Tratos O Penas Cruelles.	14
1.3. Prohibición De Tortura Y Otros Tratos O Penas Cruelles.	16
1.4. Definición Y Alcance De La Tortura Y Otros Tratos O Penas Cruelles.	20
1.5. Otros Sistemas De Protección.	25
2. NORMATIVIDAD COLOMBIANA ACERCA DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS Y PENAS CRUELES.	28
2.1. La Tortura En La Legislación Penal Colombiana.	30
2.2. Otras Disposiciones Acerca De La Tortura.	31
3. ANÁLISIS DE LOS ACTOS DE TORTURA EN COLOMBIA.	33
3.1. El Estado Como Principal Perpetrador De Actos De Tortura Y Tratos O Penas Cruelles.	33
3.2. Los Actos De Tortura En Colombia Una Práctica Generalizada Y Sistemática.	35
3.3. Fines Y Patrones De Los Actos De Tortura En Colombia.	36
3.4. Otras Cifras De Tortura Y Tratos O Penas Cruelles En Colombia.	38
3.5. Observaciones Al Desarrollo De La Tortura Y Tratos O Penas Cruelles En Colombia.	39
4. ESPACIOS PROPICIOS PARA LOS ACTOS DE TORTURA Y	43

TRATOS O PENAS CRUELES: CONFLICTO ARMADO INTERNO Y HACINAMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO.	
4.1. Contexto General Del Conflicto Armado Interno.	43
4.2. Conflicto Armado Interno: Mas De 50 Años De Una Violencia.	45
4.3. Familiares De Personas Desaparecidas: Víctimas De Tortura.	49
4.4. Hacinamiento Carcelario Y Penitenciario En Colombia.	49
4.4.1. La Crisis Carcelaria Y Penitenciaria En Colombia.	50
4.4.2. Los Actos De Tortura En Centros Carcelarios Y Penitenciarios.	52
4.4.3. Observaciones De Organizaciones Acerca De La Tortura En Centro Carcelario.	57
CONCLUSIONES.	60
RECOMENDACIONES.	63
BIBLIOGRAFIA.	64

RESUMEN.

La tortura ha formado parte de la historia de la humanidad como herramienta de control, obtención de confesión, castigo y eliminación de la oposición de un Gobierno. Ha estado presente en los capítulos más crueles de la historia de la humanidad como ingrediente principal, por ejemplo en el holocausto Judío a manos de los Nazis, la Inquisición de la iglesia católica, dictaduras, guerras, entre otros. Por su parte Colombia ha sido un país acostumbrado a la violencia, y en ella la tortura también ha sido utilizada; en la actualidad padece de un conflicto armado interno de hace más de 50 años, una crisis carcelaria y penitenciaria de hace 20 años; y hay fenómenos criminales como las bacrim, los falsos positivos, el narcotráfico, entre otros.

Por lo anterior esta investigación se encaminó a analizar el tratamiento de la tortura y otros tratos o penas crueles del Estado Colombiano en el territorio nacional según las obligaciones internacionales. Por lo que se aplicó una metodología cualitativa con enfoque descriptivo; en el que primero se conoció cuáles son los parámetros establecidos por la comunidad internacional plasmada en la normatividad, luego se identificó la legislación y jurisprudencia generada por el Estado Colombiano de acuerdo con esas pautas internacionales y por último se evaluaron los resultados de los actos de tortura en el país.

Palabras Claves: acto de Tortura y Trato o Pena Cruel, Inhumana o Degradante; Derechos Humanos; Derecho Internacional. Hacinamiento Carcelario; Conflicto Armado.

INTRODUCCIÓN.

Colombia ha vivido, desde que logro su independencia, fuertes episodios de violencia en el que la población ha sido víctima de innumerables actos que vulneraron sus derechos. Alexander Cotte manifiesta que “La violencia en el país sigue siendo atribuida mayoritariamente a un fenómeno cultural Generalizado, enraizado en las características de la sociedad”¹; hace parte de la cotidianidad de los colombianos, el diario vivir de homicidios, masacres, secuestros, extorsiones, narcotráfico, entre otros; pero hay un acto delictivo en especial del cual poco se menciona como lo es la tortura, que ha sido un ingrediente más de esa violencia habitual.

El conflicto armado interno que ha padecido el país los últimos 50 años, en la actualidad registra 7.028.776 víctimas² en la Red Nacional de Información, más de 9000 víctimas de tortura y 150.000 en desaparición forzada. En el conflicto según la Coalición Colombiana Contra la Tortura manifiesta acerca de la tortura y tratos o penas crueles que:

Esta violación a los derechos humanos continúa cometiéndose al tiempo con otras conductas como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencia sexual y el reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto armado interno. Es una práctica sistemática y generalizada perpetrada por todos los actores armados que participan del conflicto colombiano (fuerza pública, grupos paramilitares y guerrillas), y que también ocurre por fuera del conflicto.³

En un boletín emitido por Coalición Colombiana Contra la Tortura en el 2014 se exhortaba a la sociedad a participar en el día mundial en contra de la tortura el 26 de junio pero además se denunciaba:

En Colombia la tortura y los tratos crueles inhumanos o degradantes, son conductas vigentes y no son satisfactoriamente investigadas y sancionadas por la administración de justicia; una situación que se agrava por la congestión del aparato judicial. La tortura se manifiesta principalmente en: persecución política, detenciones con el propósito de obtener una confesión o información, o como método de sometimiento de la población carcelaria, discriminación, represión de la protesta social y acciones que generan terror en las personas y las comunidades.⁴

La tortura ha hecho parte de la historia de la humanidad como herramienta de control, obtención de confesión, castigo y eliminación de la oposición, ha sido visible en los capítulos más crueles de la historia de la humanidad como en el

¹ COTTE POVEDA, ALEXANDER. Una Explicación De Las Causas Económicas De La Violencia En Colombia. Bogotá: Universidad de la Salle. 2009. Pág. 2.

² Red Nacional de Información. Reporte General Desagregado Por Hechos. Actualizado 1 noviembre 2014. Bogotá. RNI, 2014

³ Coalición Colombiana Contra la Tortura. Situación De Tortura En Colombia. Bogotá. 2014.

⁴ Coalición Colombiana Contra la Tortura. Boletín informativo. Bogotá. 2014.

holocausto Judío a manos de los Nazis, la Inquisición de la iglesia católica, dictaduras, entre otros.

Amnistía Internacional dice que: “que la tortura es una práctica común y sistemática en muchos países, independientemente de sus ideologías o sistemas económicos. La tortura ha sido muchas veces parte integrante de la estrategia de seguridad de un gobierno, un instrumento de la maquinaria estatal para eliminar a los disidentes”.⁵

Colombia ha sido un país acostumbrado a la violencia y en ella la tortura también ha sido utilizada; en la historia nacional se marcan graves episodios de violencia y aun en la actualidad padece de un conflicto armado interno de hace más de 50 años, una crisis carcelaria y penitenciaria de hace 20 años; y hay fenómenos criminales como las bacrim, los falsos positivos, el narcotráfico, entre otros.

El Derecho internacional ha sido muy estricto en la construcción de unas obligaciones a los Estados para que eliminen todo tipo de tortura y otros tratos o penas crueles, por lo cual en el corpus iuris se han desarrollado una serie de tratados, convenciones que regulan ampliamente sobre la tortura; hasta es elevado a crimen internacional en el Estatuto de Roma. Un estudio global desarrollado por Amnistía Internacional expresa una alarmante conclusión: 30 años después de la Convención de la ONU, casi la mitad de la población mundial sigue sin sentirse a salvo de este atroz abuso”⁶.

El Estado Colombiano ha mostrado en innumerables oportunidades su compromiso con la promoción y protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; ha firmado y ratificado todos los tratados y convenciones frente a la tortura y tratos o penas crueles, además ha creado la normatividad y jurisprudencia nacional al respecto.

El problema se centra en que la comunidad y organizaciones internacionales han expresado, teniendo en cuenta las cifras que han recolectado, que en Colombia predomina la impunidad de los casos de tortura, tratos o penas crueles.

Por lo anterior esta investigación va encaminada a examinar la tortura y otros tratos o penas crueles del Estado Colombiano en el territorio nacional según las obligaciones internacionales. Por lo que se pretende implementar una metodología cualitativa con un enfoque descriptivo en el que primero se conozcan cuáles son los parámetros establecidos por la comunidad

⁵ Amnistía Internacional. La Tortura, Derechos Humanos Carpeta Didáctica. Barcelona. 2010. Pág. 3.

⁶ AMNISTÍA INTERNACIONAL. Informe La Tortura 2014: 30 Años de Promesas Incumplidas. 2014. Pág. 6.

internacional, luego identificar la normatividad y jurisprudencia generada por el Estado Colombiano de acuerdo a esos estándares internacionales y por último evaluar los resultados de la aplicación de esos mecanismos de protección en el territorio nacional.

La importancia de este trabajo radica en hacer visible la actual situación del país en materia de tratos o penas crueles y así la comunidad se beneficie desde la academia a partir del conocimiento creado, siendo de utilidad para operadores jurídicos, organizaciones y líderes de derechos humanos, académicos e investigadores del tema; y comunidad en general.

METODOLOGIA.

Para este trabajo se utilizó una metodología cualitativa con un enfoque descriptivo de tipo básico en el que se pretende analizar el tratamiento de la tortura y otros tratos o penas crueles del Estado Colombiano en el territorio nacional según las obligaciones internacionales.

Por lo que al inicio se describió los parámetros establecidos por la comunidad internacional a través del cuerpo normativo y jurisprudencial internacional; luego se identificó la normatividad y jurisprudencia generada por el Estado Colombiano y por último se examinó los resultados que se han tenido hasta la fecha.

El espacio geográfico de estudio es el territorio de Colombia, pese a que se tomaron referentes internacionales para establecer los parámetros internacionales de la tortura. El espacio temporal era al inicio el año 2014, pero no se encontró suficiente información específica de ese año por lo que se hace un estudio de los años que se dispone información.

Esta investigación es básica y se centra en la revisión normativa y jurisprudencial a nivel internacional y nacional; la información acerca de los resultados de la promoción y protección de la tortura y tratos o penas crueles, además en los informes e investigaciones que se han realizado por parte de las autoridades competentes y organizaciones que se especialicen en el tema.

Las técnicas e instrumentos que se pusieron en funcionamiento para la recolección de la información fueron rastreos bibliográficos, normativos y jurisprudenciales mediante resúmenes analíticos de investigación; una vez recolectada la información se utilizó la técnica de análisis de contenido.

Para la presente investigación se había previsto como limitante la indagación sin financiación de entidades estatales o empresas del sector privado por lo que a falta de contar con un presupuesto se planteó una metodología en la que se recurrió únicamente a la revisión de documentos. Lastimosamente la información disponible es muy poca debido a que Colombia no es un país acostumbrado a la implementación de sistemas de información estadísticos, que además sean de fácil actualización. Las entidades públicas que se visitaron manifestaron que no disponían de información al respecto. Por lo que la información obtenida es de informes de organizaciones nacionales e internacionales que realizan investigaciones en el tema.

1. NORMATIVIDAD INTERNACIONAL ACERCA DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS Y PENAS CRUELES.

1.1. ANTECEDENTES.

En la historia de la humanidad la violencia ha sido un aspecto predominante, y la Tortura ha sido un ingrediente especial; la tortura ha sido puesta en marcha de diversas formas con el fin de controlar, someter y quebrantar la voluntad de la persona; los fines para aplicarla van desde obtener información, una confesión, o bien castigar e intimidar.

En cada edad de la historia de la humanidad se ha utilizado la tortura, algunos apartes que podemos mencionar son:

En la ley romana más antigua, como en la ley griega, sólo los esclavos podían ser torturados si eran acusados de un crimen. Como en Grecia, los propietarios romanos de esclavos tenían el derecho absoluto de castigar y torturar a sus esclavos cuando sospechaban que eran culpables de delitos contra la propiedad. Este derecho no fue abolido en la ley romana hasta el 240 d.C. por un rescripto del emperador Gordiano.⁷

Amnistía internacional en un estudio de la historia de la tortura para establecer una definición de estos actos, lo realizó dependiendo la época en que se aplicaron estos medios:

1. Ulpiano, jurista del siglo III, mantenía que "Por 'quæstio' (tortura) hay que entender el tormento y el sufrimiento del cuerpo con el fin de obtener la verdad. Ni el interrogatorio propiamente dicho ni el temor ligeramente inducido están relacionados con este edicto...".
2. En el siglo XIII, el jurisconsulto romano dedicado al derecho, Azo, da la siguiente definición: "La tortura es la búsqueda de la verdad mediante el tormento".
3. En el siglo XVII, el jurisconsulto dedicado al derecho civil, Bocero, decía: "La tortura es el interrogatorio mediante el tormento del cuerpo, respecto a un delito que se sabe que ha sido cometido, ordenado legítimamente por un juez con el fin de obtener la verdad".
4. En el siglo XX, el historiador de derecho John Langbein escribió: "Cuando se habla de tortura judicial, nos referimos al uso de la coacción física por funcionarios del Estado con el fin de obtener pruebas para los procesos judiciales... En cuestiones de Estado, la tortura fue también utilizada para obtener información en circunstancias no relacionadas directamente con los procesos judiciales".
5. Otro historiador del siglo XX, John Heath, mantiene: "Entiendo por tortura la imposición de un sufrimiento corporal o la amenaza de infringirlo inmediatamente, cuando esta imposición o amenaza se propone obtener información, o es inherente a los medios empleados para obtener información o pruebas forenses, y el motivo es de índole militar, civil o eclesiástica".⁸

⁷ AMNISTIA INTERNACIONAL. Historia de la Tortura. Catalunya. 2014. Pág. 3.

⁸ AMNISTIA INTERNACIONAL. Historia de la Tortura. Catalunya. 2014. Pág. 2.

Granados y Rodríguez⁹ para el período conocido como Edad Media, se generalizó la implementación de un procedimiento penal secreto, caracterizado por ser descontrolado e inhumano; se daba un encarcelamiento indefinido sin causa y la práctica de la tortura. En esta época oscura el procesado carecía en absoluto de derechos, entre ellos, el derecho a no ser sometido a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

En el siglo XII se produjo una revolución en el derecho y la cultura jurídica, Amnistía Internacional asegura que “derivó de una transformación del derecho que había existido entre el siglo VI y el XII y de una creciente conciencia de la necesidad de crear leyes universalmente obligatorias y aplicables en toda la Europa Cristiana”¹⁰. Y también Amnistía manifiesta que:

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, los estados civilizados, uno tras otro, abolieron la tortura. Este proceso de abolición de la tortura fue en primer lugar parte de una revisión general de los sistemas jurídicos penales, y, en segundo lugar, un proceso que tuvo lugar en largos periodos de tiempo, normalmente décadas.¹¹

Para la comunidad internacional es una prioridad eliminar cualquier acto de tortura y otros tratos y penas crueles en cualquier país del mundo, es una práctica bastante reprochable y ha dejado penosas marcas en la historia de la humanidad.

1.2. Contexto Actual De La Tortura Y Tratos O Penas Crueles.

Para Amnistía Internacional “la tortura es una práctica común y sistemática en muchos países, independientemente de sus ideologías o sistemas económicos. La tortura ha sido mucha veces parte integrante de la estrategia de seguridad de un gobierno, un instrumento de la maquinaria estatal para eliminar a los disidentes”¹². Amnistía¹³ asegura que en los Estados son dos los motivos principales por los que se produce la tortura: el primero porque los gobiernos creen que esa práctica les beneficia y, la segunda, la persistencia de una cultura de la impunidad.

Según Figueroa en la tortura “se busca llegar hasta lo más profundo del objetivo del terror que es la desarticulación de la voluntad. Se busca transformar

⁹ GRANADOS ARGOTE, Vannesa y RODRÍGUEZ FONTECHA, María. Análisis De La Tortura Y Otros Tratos O Penas Crueles, Inhumanos O Degradantes Desde La Perspectiva Del Derecho Internacional. Bogotá D.C., 2011, 85p. Trabajo de Investigación (Maestría En Derecho Penal Y Criminología). Universidad Libre De Colombia. Instituto De Posgrados Facultad De Derecho. Pág. 9.

¹⁰ AMNISTIA INTERNACIONAL. Historia de la Tortura. Catalunya. 2014. Pág. 5.

¹¹ AMNISTIA INTERNACIONAL. Historia de la Tortura. Catalunya. 2014. Pág. 6.

¹² AMNISTIA INTERNACIONAL. La Tortura. Los Derechos Humanos, carpeta didáctica. 2014. Pág. 3.

¹³ AMNISTÍA INTERNACIONAL. Informe La Tortura 2014: 30 Años de Promesas Incumplidas. 2014. Pág. 13.

resistencia en docilidad. Docilidad en identificación. Identificación en admiración hacia el carcelero y torturador”¹⁴. Las afectaciones por actos de tortura y tratos o penas crueles van directamente a la dignidad humana y la integridad física y psíquica por lo que según Puyana “ocupa un lugar jerárquicamente superior en el derecho internacional de los derechos humanos. Por tanto, la comunidad internacional ha buscado traducir la protección de esta integridad, mediante la redacción de diferentes textos internacionales”¹⁵.

Las Naciones Unidas han señalado que los tipos de tortura comunes y las señales físicas que generan, son las siguientes:

- Golpes y otras formas de violencia por objetos contundentes, que pueden causar rotura de huesos, contusiones, cicatrices y marcas estriadas (como resultado de golpes con una caña o palo)
- Golpes en la planta de los pies, que pueden provocar dolores intermitentes en los pies y piernas, hormigueos y pinchazos en las piernas y los pies, así como duras y gruesas cicatrices en las plantas de los pies
- Quemaduras, que pueden provocar cicatrices de diversas formas y tamaños
- Suspensión, que provoca una sensación ardiente y dolor agudo en brazos y piernas
- Tortura eléctrica, que puede ocasionar cambios en la piel y astillamiento o pérdida de dientes
- Ahogamiento parcial con agua, que puede provocar bronquitis crónica
- Tortura sexual, que puede causar daños en la zona genital, irregularidad en los períodos, aborto espontáneo, dolor testicular, prurito anal, enfermedades de transmisión sexual y disfunción sexual.¹⁶

Además, señala la ONU¹⁷ que las personas que han sido torturadas probablemente presenten: recuerdos angustiosos constantes del suceso, tengan pesadillas recurrentes, sufran con las cosas que les recuerden la tortura, traten de evitar situaciones que les traigan recuerdos de la tortura, se muestren incapaces de recordar aspectos de lo acontecido, se muestren ausentes del mundo que les rodea; también se ha establecido que se puede encontrar ciertas respuestas en las víctimas de Tortura como por ejemplo: dificultad para dormir, irritabilidad o ira, dificultad para concentrarse, hipervigilancia, respuesta de sobresalto exagerada; entre otras.

¹⁴ FIGUEROA Ibarra, Carlos. Dictaduras, Terror y Torturas en América Latina. En: Bajo el Volcán. Vol.; 2. No.3 (jul-dic 2001). Pág. 14.

¹⁵ PUYANA, David F. "La Noción de Tortura y Otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes en el Marco del Comité de Derechos Humanos y el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas." En: American University International Law Review. Vol.; 21. No.1 (2005); 101-148.

¹⁶ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Prevención de la tortura: Guía Operacional Para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Suiza. 2010. Pág. 51.

¹⁷ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Prevención de la tortura: Guía Operacional Para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Suiza. 2010. Pág. 52.

Menciona el Consejo Internacional De Rehabilitación Para Víctimas De La Tortura que “los efectos potenciales de la tortura incluyen experiencias traumáticas acumulativas a nivel individual, trauma familiar a nivel familiar y trauma comunitario a nivel comunitario”¹⁸ y en cada nivel describe que:

1. NIVEL INDIVIDUAL.

La tortura es un proceso dinámico que comienza en el momento de la privación de la libertad, incluye una secuencia de acontecimientos traumáticos que pueden tener lugar en diferentes momentos y lugares, y finaliza con la liberación o fallecimiento de la víctima.

2. NIVEL FAMILIAR.

Además, la tortura puede dejar daños profundos en las relaciones íntimas entre cónyuges, padres e hijos y otros miembros de la familia, así como en las relaciones entre las víctimas y sus comunidades.

3. NIVEL COMUNITARIO.

Uno de los propósitos de la tortura es la intimidación de terceros, asegurando con ello respuestas de temor, inhibición, parálisis, impotencia y conformidad dentro de la sociedad.¹⁹

Es así como diferentes tratados y convenciones han sido construidos bajo el fin de consagrar la dignidad humana e integridad personal, a través de la prohibición y erradicación de este fenómeno de la tortura y otros tratos o penas crueles; por lo que el corpus iuris del Derecho Internacional ha construido un cuerpo normativo bastante amplio y extenso al respecto. A continuación se mostrará cual es el alcance de la normatividad internacional.

1.3. Prohibición De Tortura Y Otros Tratos O Penas Cruels.

Para la comunidad internacional era una prioridad la prevención y protección de los Derechos Humanos y la creación de un cuerpo normativo internacional que estableciera los derechos, las prohibiciones y los mecanismos de prevención y sanción de estas violaciones; López Pinilla indica que “dicha necesidad se acentuó tras la segunda guerra mundial, la cual se destacó por la crudeza alcanzada en los campos de concentración, fue esta crudeza la que sacudió a la humanidad y la llevó a tomar acciones nunca antes realizadas”²⁰.

¹⁸ CONSEJO INTERNACIONAL DE REHABILITACIÓN PARA VÍCTIMAS DE LA TORTURA (IRCT, siglas en ingles). La Evaluación Psicológica De Alegaciones De Tortura: Una Guía Práctica Del Protocolo De Estambul – Para Psicólogos. Segunda Edición. Copenhague. 2007. Pág. 10.

¹⁹ CONSEJO INTERNACIONAL DE REHABILITACIÓN PARA VÍCTIMAS DE LA TORTURA (IRCT, siglas en ingles). La Evaluación Psicológica De Alegaciones De Tortura: Una Guía Práctica Del Protocolo De Estambul – Para Psicólogos. Segunda Edición. Copenhague. 2007. Pág. 10

²⁰ LOPEZ PINILLA, Ana María. La tortura como noticia actual. En Derechos humanos en el ámbito internacional; Vol.1, 01(Enero-Junio 2010). pág. 3.

Para empezar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 3 establece “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”²¹ y además en su artículo 5 consagra que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”²². En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en su artículo 7 establece claramente la prohibición de la tortura y los malos tratos al indicar “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes...”²³. A nivel del continente americano anota Martin y Rodríguez-Pinzón que:

Asimismo, puede afirmarse que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre también prohíbe toda conducta constitutiva de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Aunque dicho instrumento no contenga una prohibición específica de la tortura, su Artículo I garantiza a todo ser humano el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona²⁴.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien se encarga de vigilar el cumplimiento del PIDCP menciona sobre la prohibición de la tortura y los malos tratos en su Observación General N° 20 del año 1992, en la cual señala que:

El texto del artículo 7 (del PIDCP) no admite limitación alguna. El Comité reafirma asimismo que, incluso en situaciones excepcionales (...) nada autoriza la suspensión de la cláusula del artículo 7, y las disposiciones de dicho artículo deben permanecer en vigor. Análogamente, el Comité observa que no se puede invocar justificación o circunstancia atenuante alguna como pretexto para violar el artículo 7 por cualesquiera razones, en particular las basadas en una orden recibida de un superior jerárquico o de una autoridad pública²⁵.

Agrega Martin y Rodríguez-Pinzón que “la Convención Americana establece el derecho a la integridad personal (en la versión inglesa «trato humano») en su Artículo 5. El Artículo 5(1) garantiza el derecho a la integridad física, psíquica y moral”²⁶. Anota Amnistía que el 9 de diciembre de 1975 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una Declaración que buscaba que ningún

²¹ DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (DUDH). Artículo 3. Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 217 A (III), 10 de diciembre de 1948.

²² DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (DUDH). Artículo 5. *Ibid.*

²³ PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. Asamblea General de las Naciones Unidas. Ratificación y adhesión resolución 2200 A (XXI). 16 de diciembre de 1966. Artículo 7.

²⁴ MARTIN, Claudia y Rodríguez-Pinzón, Diego. La Prohibición de la Tortura y los Malos Tratos en el Sistema Interamericano. Ginebra. 2006. Pág. 100. (ISBN 2-88477-119-0).

²⁵ COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. 44º período de sesiones (1992). Observación general N°20: Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7). 1992. Como se citó en: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Torturado, encarcelado e inocente: El caso de Israel Arzate Meléndez y el uso sistemático de la tortura para obtener confesiones falsas en México. 2010. Pág. 14-15.

²⁶ MARTIN, Claudia y Rodríguez-Pinzón, Diego. *Ibid.* 100p.

Estado tolerara la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes y señaló que:

Finalmente, el artículo I de la Declaración contra la Tortura (...) dice así: "Para los fines de esta declaración, tortura es todo acto mediante el cual se inflige intencionadamente un dolor o sufrimiento intenso, físico o mental, y por instigación de un funcionario público, a una persona con el fin de obtener de ella o de una tercera una información o confesión, a fin de castigarla, o bien de intimidarla, directamente o a través de otras personas. No incluye el dolor o sufrimiento proveniente, inherente o propio de sanciones legítimas si se ajustan a las Reglas Mínimas Legales para el Tratamiento de Presos"²⁷.

La Declaración Americana se complementa en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y en el artículo 1 dispone que "Los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención"²⁸. Esta Convención establece: "la obligación de los Estados partes de prevenir y sancionar la tortura"²⁹. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos frente a la existencia de un ius cogens que profesa una prohibición absoluta de todas las formas de tortura:

La prohibición de la tortura es completa e inderogable, aun en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas³⁰.

Posteriormente se aprobó La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención CAT), deja claro la prohibición absoluta de torturar y dispone en su artículo 2:

1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.
2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.
3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura³¹.

²⁷ AMNISTIA INTERNACIONAL. La Tortura. Los Derechos Humanos, carpeta didáctica. 2014.

²⁸ Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Cartagena de Indias, 1985.

²⁹ MARTIN, Claudia y Rodríguez-Pinzón, Diego. La Prohibición de la Tortura y los Malos Tratos en el Sistema Interamericano. Ginebra. 2006. Pág. 100. (ISBN 2-88477-119-0).

³⁰ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 7 de septiembre de 2004, *Caso Tibi c. Ecuador*, párrafo 143. Como se citó en: Procuraduría General de la Republica. Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de Posible Tortura y/o Maltrato. Nov-2012. Pág. 11.

³¹ Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Asamblea General Naciones Unidas. 26 de junio de 1987. Artículo 1.

Pero no solo se prohíbe la Tortura o cualquier tipo de trato o pena cruel, sino además se penaliza a nivel internacional, tal como lo señala Amnistía Internacional³² quien asegura que son considerados delitos en el derecho penal internacional la tortura y algunas otras formas de trato o pena cruel, inhumano o degradante especialmente en el contexto de un conflicto armado o como elemento en un crimen contra la humanidad.

Frente a estos delitos internacionales de tortura las Naciones Unidas³³ expresan que la Corte Penal Internacional, creada el 17 de julio de 1998 en el Estatuto de Roma con sede en la Haya, juzga a los responsables de delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La Corte conoce de los casos de tortura que se cometan a gran escala y de modo sistemático como parte del delito de genocidio o como crimen de lesa humanidad, o como crimen de guerra de acuerdo a los Convenios de Ginebra.

Además la Organización de las Naciones Unidas ha estructurado una serie de normas y principios profesionales para prevenir y atender los casos de tortura y los tratos o penas crueles, como son:

- Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos
- Principios básicos para el tratamiento de los reclusos
- Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión
- Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad
- Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing)
- Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes
- Model Autopsy Rules (Modelo de normas en materia de autopsias)
- Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
- Principios Básicos para el empleo de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
- Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (Protocolo de Estambul)³⁴.

Las Naciones Unidas³⁵ han creado una serie de órganos y mecanismos para materializar y supervisar el cuerpo normativo y de principios acerca de la

³² Amnistía Internacional. Informe La Tortura 2014: 30 Años de Promesas Incumplidas. 2014. Pág. 43.

³³ Organización de las Naciones Unidas. Protocolo de Estambul: Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Nueva York. 2004. Pág. 35.

³⁴ Organización de las Naciones Unidas. Prevención de la tortura: Guía Operacional Para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Suiza. 2010. Pág. 34.

prevención y protección contra la tortura y tratos o penas crueles, dichos organismos y mecanismos son: a) El Comité contra la Tortura, b) El Comité de Derechos Humanos, c) La Comisión de Derechos Humanos, d) El Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, e) El Relator Especial sobre la violencia contra la mujer y f) El Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura; a lo largo de este documento se verá los pronunciamiento y acciones que han realizado en pro de la eliminación de este fenómeno.

Es entonces una muralla normativa internacional que busca prevenir y proteger de la implementación de cualquier tipo de tortura y otros tratos o penas crueles de los Estados y así no se repita las atrocidades que amargamente recuerda la humanidad en su historia.

1.4. Definición Y Alcance De La Tortura Y Otros Tratos O Penas Cruels.

La comunidad internacional ha trabajado arduamente por establecer claramente qué se entiende por tortura y otros tratos o penas crueles para poder investigar y sancionar actos pasados, y prevenir acciones futuras; además de conocer más a fondo los elementos, las consecuencias, los límites, entre otros.

La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes para empezar en su artículo 1 establece que:

1. A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumana o degradante³⁶.

Por su parte la convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en su artículo 2 expresa acerca de la definición que:

³⁵ Organización de las Naciones Unidas. Protocolo de Estambul: Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Nueva York. 2004. Pág. 23-28.

³⁶ Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes. Asamblea General Naciones Unidas. 9 de diciembre de 1975. Artículo 1.

Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.

No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo³⁷.

Gonzalo Bueno considera frente a esta normatividad “definen el concepto más avanzado de tortura al que se ha llegado en el derecho internacional de los derechos humanos (...), la Convención Interamericana desarrolla aspectos sumamente novedosos”³⁸. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en estudiando los artículos 2 y 3 de la Convención concluyó que para calificar un acto como tortura: “a) debe tratarse de un acto intencional o de un método; b) debe infligir a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales; c) debe tener un propósito; d) debe ser perpetrado por un funcionario público o por una persona privada a instancias del primero”³⁹.

La Jurisprudencia de la Corte Interamericana también ha aclarado varios puntos acerca de lo establecido en la convención, por ejemplo ha mencionado que la tortura no solo implica un daño físico sino puede crearse un sufrimiento psicológico o angustia moral, añade que:

...de acuerdo a las circunstancias de cada caso en particular, algunos actos de agresión infligidos a una persona pueden calificarse como torturas psíquicas, particularmente los actos que han sido preparados y realizados deliberadamente contra la víctima para suprimir su resistencia psíquica y forzarla a auto inculparse o a confesar determinadas conductas delictivas o para someterla a modalidades de castigos adicionales a la privación de la libertad en sí misma⁴⁰.

³⁷Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Cartagena de Indias, 1985.

³⁸ BUENO, Gonzalo. El Concepto De Tortura Y De Otros Tratos Crueles, Inhumanos O Degradantes En El Derecho Internacional De Los Derechos Humanos. Editores del Puerto. Buenos Aires. 2003. Pág. 16-17.

³⁹ COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. *Informe 35/96, Caso 10.832 “Luis Lizardo Cabrera” (República Dominicana)*, 7 de abril de 1998. Como se citó en: Bueno, Gonzalo. El Concepto De Tortura Y De Otros Tratos Crueles, Inhumanos O Degradantes En El Derecho Internacional De Los Derechos Humanos. Editores del Puerto. Buenos Aires. 2003. Pág. 22.

⁴⁰ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Como se citó en: MARTIN, Claudia y

La Corte además ha aclarado, en el proceso que “para distinguir la tortura de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es la intensidad del sufrimiento”⁴¹.

Señala además la Jurisprudencia de la Corte Interamericana para que un acto sea considerado tortura debe cumplir con los siguientes tres elementos: “1) una acción deliberada o acto intencional; 2) que la víctima sufra dolor o angustia físicos o psicológicos severos; y 3) una finalidad por la que aplicar la tortura”⁴².

En cuanto a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el artículo 1 consagra que:

1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.

2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance⁴³.

Para Organización de las Naciones Unidas la definición de tortura que ofrece la Convención excluye explícitamente los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas⁴⁴. Plantea que la legitimidad de la sanción se debe encontrar en las normas nacionales además respetar los parámetros mínimos para el tratamiento de los reclusos que ésta organización a su vez ha establecido en diferentes textos, como la Declaración sobre la Protección de

Rodríguez-Pinzón, Diego. La Prohibición de la Tortura y los Malos Tratos en el Sistema Interamericano. Ginebra. 2006. Pág. 104. (ISBN 2-88477-119-0).

⁴¹ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia de 11 de marzo de 2005. Como se citó en: MARTIN, Claudia y Rodríguez-Pinzón, Diego. La Prohibición de la Tortura y los Malos Tratos en el Sistema Interamericano. Ginebra. 2006. Pág. 105. (ISBN 2-88477-119-0).

⁴² MARTIN, Claudia y Rodríguez-Pinzón, Diego. La Prohibición de la Tortura y los Malos Tratos en el Sistema Interamericano. Ginebra. 2006. Pág. 2. (ISBN 2-88477-119-0).

⁴³ CONVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. Asamblea General Naciones Unidas. 26 de junio de 1987. Artículo 1.

⁴⁴ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Prevención de la tortura: Guía Operacional Para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Suiza. 2010. pág. 23.

todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1975).

Frente a los tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, el artículo 16(1) de la Convención anteriormente citada se consagra que:

Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona⁴⁵.

Puyana realiza un análisis profundo de la convención desde la lectura en conjunto del artículo 1 y 16, y hace un aporte frente al concepto jurídico internacional de Tortura, manifestando que:

requiere de la presencia de tres elementos constitutivos: el material ("dolores o sufrimientos graves" infligidos intencionalmente a una persona), el sujeto activo cualificado (funcionario público implicado de manera directa o indirecta) y el elemento teleológico (los dolores o sufrimiento graves deben infligirse con unos fines u objetivos determinados, a decir obtener de ella (la víctima) o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basa en cualquier tipo de discriminación).⁴⁶

Por su parte el Dr. Bueno anota frente a la Convención para que un acto sea constitutivo en Tortura debe presentarse y apreciarse tres elementos: "a) debe provocar un severo sufrimiento físico o mental, b) deber ser intencional, y c) debe tener como objeto la obtención de información o de confesiones, el castigo, intimidación o coerción de la víctima"⁴⁷.

Considera el Comité contra la Tortura que "cualquier acto que no llegue a considerarse tortura con arreglo a su definición debido a que no cumpla alguno de los criterios seguirá estando abarcado por la prohibición señalada en el

⁴⁵ CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. Asamblea General Naciones Unidas. 26 de junio de 1987. Artículo 16(1).

⁴⁶ PUYANA, David F. "La Noción de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Marco del Comité de Derechos Humanos y el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas." En: American University International Law Review. Vol.; 21. No.1 (2005); pág. 6.

⁴⁷ BUENO, Gonzalo. El Concepto De Tortura Y De Otros Tratos Crueles, Inhumanos O Degradantes En El Derecho Internacional De Los Derechos Humanos. Editores del Puerto. Buenos Aires. 2003.

artículo 16 de la Convención contra la Tortura”⁴⁸ y así lo comunicó en el caso Kostadin Nikolov Keremedchiv c. Bulgaria.

Dentro de las actividades del Comité contra la Tortura en aplicación del Artículo 20 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a partir de su experiencia ha definido que:

La tortura es una práctica sistemática cuando se vea que los casos de tortura reportados no han ocurrido fortuitamente, en un momento o lugar particulares, sino que, por el contrario, parecen ser habituales, generalizados y deliberados en al menos una parte considerable del territorio del país en cuestión. La tortura puede ser de carácter sistemático, aun cuando no sea resultado de una intención directa de un Gobierno. Puede ser consecuencia de factores que el Gobierno central tiene dificultad en controlar, y su existencia puede indicar una discrepancia entre la política tal como ha sido definida por el Gobierno central, y su puesta en práctica por la administración local. Una legislación inadecuada que en la práctica dé lugar al uso de la tortura, puede contribuir también al carácter sistemático de esta práctica.⁴⁹

Una Práctica Sistemática ha sido considerado por el Comité contra la Tortura⁵⁰ se presenta dentro de un Estado parte cuando se presentan los siguientes elementos:

- La permanencia de la práctica de la tortura en el tiempo
- El carácter habitual e intencional de las violaciones en una parte considerable del territorio del Estado en cuestión.
- La existencia de una legislación inadecuada que en la práctica permita o estimule el uso de la tortura.

Ahora al referirse a las obligaciones de un Estado frente a los casos de Tortura El Comité contra la Tortura (Comité CAT) ha interpretado al respecto que:

Los Estados Partes están obligados a eliminar todos los obstáculos legales y de otra índole que impidan la erradicación de la tortura y los malos tratos, y a adoptar medidas eficaces para impedir efectivamente esas conductas y su reiteración. También tienen la obligación de mantener en examen y mejorar constantemente su legislación nacional y actuación en lo que respecta a la Convención.⁵¹

⁴⁸ COMITÉ CONTRA LA TORTURA, Comunicación N°257/2004, Kostadin Nikolov Keremedchiv c. Bulgaria. dictamen aprobado el 11 de noviembre de 2008.

⁴⁹ COMITÉ CONTRA LA TORTURA, en aplicación del Artículo 20 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: Perú, 16/05/2001, A/56/44, párr. 20. Como se citó en: ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA. Violencia Estatal En Colombia: Un Informe Alternativo Presentado Al Comité Contra Tortura De Las Naciones Unidas. Ginebra. 2004. pág. 9.

⁵⁰ ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA, ibíd. pág. 16-17.

⁵¹ COMITÉ CONTRA LA TORTURA. Observación General N° 2. 2008. Como se citó en: CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO JUÁREZ. Torturado, encarcelado e inocente: El caso de Israel Arzate Meléndez y el uso sistemático de la tortura para obtener confesiones falsas en México. 2010. pág. 12.

Méndez en un estudio de los alcances de las obligaciones básicas del Estado en lo que respecta a la prohibición de la tortura y los malos tratos menciona que ya el Comité contra la Tortura se ha expresado en varias ocasiones al respecto “que las obligaciones de los Estados de prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes (malos tratos) son indivisibles e interdependientes y están relacionadas entre sí porque las condiciones que dan lugar a malos tratos suelen facilitar la tortura”⁵². Méndez ha establecido que “los Estados Partes deben prohibir, impedir y castigar los actos de tortura y los malos tratos en todas las situaciones de privación o de limitación de libertad”⁵³.

1.5. Otros Sistemas De Protección.

En Europa se estableció la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y en el artículo 3 establece que “nadie debe ser sometido a torturas u otros tratos o penas inhumanos o degradantes”⁵⁴. Bueno señala que “esta disposición se inspiró en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, con una redacción prácticamente idéntica, dispone que “nadie debe ser sometido a tortura u otros tratos, crueles, inhumanos o degradantes”⁵⁵.

A raíz de ese artículo 3 posteriormente el Consejo Europeo creó la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, así, señala el Consejo Europeo frente a este convenio:

la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes están penalizados en las legislaciones nacionales y en varios instrumentos jurídicos. Sin embargo, la experiencia muestra la necesidad de adoptar medidas internacionales más amplias y eficaces, en particular para reforzar la seguridad de las personas privadas de libertad⁵⁶.

⁵² COMITÉ CONTRA LA TORTURA. Observación general N° 2, párr. 3. 2007. Como se citó en MENDEZ, Juan. Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En: Consejo de Derechos Humanos 22º período de sesiones, Tema 3 de la agenda Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo (1 de febrero de 2013); Ginebra. 2013. Pág 6.

⁵³ MENDEZ, Juan. Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En: Consejo de Derechos Humanos 22º período de sesiones, Tema 3 de la agenda Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo (1 de febrero de 2013); Ginebra. 2013. pág. 6.

⁵⁴ CONSEJO DE EUROPA. Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. 1950. Artículo 3.

⁵⁵ BUENO, Gonzalo. El Concepto De Tortura Y De Otros Tratos Crueles, Inhumanos O Degradantes En El Derecho Internacional De Los Derechos Humanos. Editores del Puerto. Buenos Aires. 2003. pág. 2.

⁵⁶ CONSEJO EUROPEO. Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes: Informe Explicativo. Extranburgo. 1987. pág. 20.

Según el Consejo Europeo “la prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes es una norma internacional general y, si bien se formula de formas diferentes, está contemplada en varios instrumentos internacionales”⁵⁷ Agrega la Corte Europea de Derechos Humanos: “la Convención prohíbe en términos absolutos a la tortura y a los tratos o penas inhumano”⁵⁸

Para la Comisión Europea cuando se causa a una persona un severo sufrimiento, mental o físico, que en la situación particular es injustificable; asegura que:

La palabra ‘tortura’ es usualmente utilizada para describir un trato inhumano que tiene un propósito, tal como la obtención de información o confesiones, o infligir un castigo, y es generalmente una forma agravada de tratamiento inhumano. El tratamiento o castigo de un individuo puede ser considerado degradante si lo humilla de forma grosera frente a otros o lo lleva a actuar contra su voluntad o conciencia”.⁵⁹

Para Bueno la Comisión Europea ha establecido para que un acto llegue a ser calificado como tortura, debe atravesar tres niveles, que son:

Primero, debe subsumirse dentro de alguno de los supuestos que definen a un trato degradante. Luego, para ser categorizado como trato inhumano, debe causar un sufrimiento mental o físico severo, aplicarse deliberadamente y carecer de justificación en las circunstancias particulares del caso. Por último, para ser calificado como tortura, el acto debe ser una forma agravada de trato inhumano y perseguir un propósito determinado.⁶⁰

Otras disposiciones que podemos encontrar son la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adoptada por la Organización de la Unidad Africana en 1981, establece lo siguiente:

Todo individuo tendrá derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano y al reconocimiento de su status legal. Todas las formas de explotación y degradación del

⁵⁷ CONSEJO EUROPEO. Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes: Informe Explicativo. Extranburgo. 1987. pág. 18.

⁵⁸ TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (TEDH), “Irlanda c. El Reino Unido”, sentencia del 18 de enero de 1978, párrafo 163. Como se citó en BUENO, Gonzalo. El Concepto De Tortura Y De Otros Tratos Crueles, Inhumanos O Degradantes En El Derecho Internacional De Los Derechos Humanos. Editores del Puerto. Buenos Aires. 2003. pág. 4.

⁵⁹ COMISIÓN EUROPEA. The Greek Case. Reporte 5 Noviembre de 1969, “Yearbook”, vol 12, p.186. como se citó en Bueno, Gonzalo. El Concepto De Tortura Y De Otros Tratos Crueles, Inhumanos O Degradantes En El Derecho Internacional De Los Derechos Humanos. Editores del Puerto. Buenos Aires. 2003. pág. 3-4.

⁶⁰ BUENO, Gonzalo. El Concepto De Tortura Y De Otros Tratos Crueles, Inhumanos O Degradantes En El Derecho Internacional De Los Derechos Humanos. Editores del Puerto. Buenos Aires. 2003. pág. 4.

hombre, especialmente la esclavitud, el comercio de esclavos, la tortura, el castigo y el trato cruel, inhumano o degradante, serán prohibidas.⁶¹

También la Carta Árabe de Derechos Humanos adoptada por la Liga de los Estados Árabes el 22 de mayo de 2004, que entró en vigor el 15 de marzo de 2008, el artículo 8 dispone lo siguiente:

1. Nadie será sometido a tortura física o psicológica ni a tratos crueles, degradantes, humillantes o inhumanos.
2. Los Estados Partes protegerán a todas las personas bajo su jurisdicción contra esas prácticas y adoptarán medidas eficaces para prevenirlas. La comisión de dichos actos, o la participación en ellos, se considerarán actos punibles conforme a la ley y no estarán sujetos a ningún régimen de prescripción. Los Estados Partes garantizarán a toda víctima de tortura recursos en sus sistemas jurídicos y el derecho a rehabilitación e indemnización.⁶²

⁶¹ ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 1981. Como se citó en: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Prevención de la tortura: Guía Operacional Para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Suiza. 2010. pág. 33.

⁶² LIGA DE LOS ESTADOS ÁRABES. Carta Árabe de Derechos Humanos. 22 de mayo de 2004, que entró en vigor el 15 de marzo de 2008. Como se citó en: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Prevención de la tortura: Guía Operacional Para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Suiza. 2010. pág. 33.

2. NORMATIVIDAD COLOMBIANA ACERCA DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS Y PENAS CRUELES.

En la Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 12 se estableció la prohibición de manera tajante: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”⁶³, pero además tiene un soporte en el cuerpo normativo internacional a través del Bloque de Constitucionalidad que como explica el Ministerio de Relaciones Exteriores en el IV informe periódico presentado al Comité Contra la Tortura sobre los progresos en la aplicación de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, explica que:

el artículo 93 de la Constitución Política, que junto con el numeral 2 del artículo 214, sirvió de fundamento para el desarrollo de la noción de Bloque de Constitucionalidad, por parte de la Corte Constitucional, dispone que “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”⁶⁴.

Por lo anterior las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y todo tratado, convención o normatividad ratificada por el Estado Colombiano adquieren el mismo nivel de normas constitucionales, prevalecen y orientan en la normatividad interna.

La Convención contra la Tortura fue aprobada por el Estado Colombiano mediante la Ley 70 de 1986 y deja tal cual la definición de la Convención en el artículo 1 como:

todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento y aquiescencia.⁶⁵

Menciona la Corte Constitucional en Sentencia 148 de 2005 que la tortura se define como “cualquier acto que en los términos y para los fines allí señalados

⁶³ CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Constitución Política. 1991. Artículo 12.

⁶⁴ MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, REPÚBLICA DE COLOMBIA. IV Informe Periódico De Colombia Al Comité Contra La Tortura Sobre Los Progresos En La Aplicación De La Convención Contra La Tortura Y Otros Tratos O Penas Crueles, Inhumanos O Degradantes. Bogotá D.C. 2012. Pág. 3.

⁶⁵ CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 70 de 1986. 1986. Artículo 1.

atente contra la autonomía personal, incluso si el mismo no causa sufrimiento o dolor”⁶⁶.

Como mencionamos anteriormente la tortura y trato o pena cruel es considerada un delito del derecho internacional, por lo que Colombia ratificó el Estatuto de Roma aceptando la jurisdicción de la Corte Penal Internacional según el Ministerio de Relaciones Exteriores⁶⁷ mediante la aprobación por el Congreso de la República en la Ley 742 de 2002 y ratificado el 5 de agosto de 2002.

Ahora, Colombia ha ratificado y aprobado la Convención Interamericana, la Convención Contra la Tortura, y el Estatuto de Roma, entre otras; estas normatividades contienen diversas definiciones y alcances frente a los actos de tortura y otros tratos crueles o penas crueles, inhumanos o degradantes y genera la inquietud ante un acto de tortura a qué normatividad recurrir; el Ministerio de Relaciones Exteriores⁶⁸ señala que la Corte Constitucional en Sentencia C-148/05 con ponencia del Magistrado Álvaro Tafur Galvis, teniendo en cuenta el principio pro homine ha manifestado que:

“Téngase en cuenta al respecto que dicha Convención no solamente es el texto que mayor protección ofrece a los derechos de las personas víctimas de tortura sino que los demás instrumentos internacionales a que se ha hecho referencia dejan claramente a salvo la aplicabilidad de la referida Convención Interamericana. Así, el numeral 2 del artículo 1° de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes señala que dicho artículo en que se define lo que se entiende por tortura para dicha Convención suscrita antes de la Convención Interamericana “se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance”. Es decir que el texto de la Convención Interamericana prima en esas circunstancias. A su vez el artículo 10 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional señala que „Nada de lo dispuesto en la presente parte se interpretará en el sentido de que limite o menoscabe de alguna manera las normas existentes o en desarrollo de derecho internacional para fines distintos del presente Estatuto”. Es decir que, el hecho de que en dicho estatuto -cuya aprobación por Colombia es la más reciente- figure una disposición que no es coincidente con la definición de tortura establecida en la Convención Interamericana, en nada impide que se tome en cuenta el contenido más garantista que se establece en la referida Convención en cuanto al delito de tortura.”⁶⁹

⁶⁶ CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-148 de 2005. Magistrado Ponente Álvaro Tafur Galvis. Como se citó en: COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bogotá. 2009. Pág. 50.

⁶⁷ MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, REPÚBLICA DE COLOMBIA. IV Informe Periódico De Colombia Al Comité Contra La Tortura Sobre Los Progresos En La Aplicación De La Convención Contra La Tortura Y Otros Tratos O Penas Crueles, Inhumanos O Degradantes. Bogotá D.C. 2012. Pág. 62.

⁶⁸ MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ibíd. Pág. 64.

⁶⁹ CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-148 de 2005. Magistrado Ponente Álvaro Tafur Galvis. Como se citó en: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, REPÚBLICA DE COLOMBIA. IV Informe Periódico De Colombia Al Comité Contra La Tortura

2.1. La Tortura En La Legislación Penal Colombiana.

La primera vez que en Colombia empieza a sancionarse penalmente el delito de tortura fue en el decreto-ley 100 de 1980, Código Penal, en el que se establecía en el artículo 279 que: “El que someta a otro a tortura física o moral, incurrirá en prisión de uno a tres años, siempre que el hecho no constituya delito sancionado con pena mayor”⁷⁰. Luego, el Gobierno Nacional en la declaratoria del Estado de Sitio en el decreto 180 de 1988 en el artículo 24 estableció como elemento objetivo que el autor lo cometa “en cumplimiento de actividades terroristas”⁷¹.

Posteriormente, el decreto 2266 de 1991, consagró como delito de tortura “El que someta a otra persona a tortura física o psíquica, incurrirá en prisión de cinco a diez años siempre que el hecho no constituya delito sancionado con pena mayor”⁷². Por medio de la ley 589 de 2000 el delito de tortura fue tipificado como el hecho de infligir a una persona “dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación”⁷³.

En la Ley 599 de 2000, actual Código Penal se plasmaron dos tipos penales, uno general en el artículo 178 y otro, el artículo 137, que se refiere especialmente a las personas protegidas por el derecho internacional humanitario dentro del conflicto armado, y que éste código describe cada uno como:

Artículo 178. Tortura. El que inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación incurrirá en prisión de ocho a quince años, multa de ochocientos (800) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad.

En la misma pena incurrirá el que cometa la conducta con fines distintos a los descritos en el inciso anterior.

No se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean con secuencia normal o inherente a ellas.

Sobre Los Progresos En La Aplicación De La Convención Contra La Tortura Y Otros Tratos O Penas Cruelles, Inhumanos O Degradantes. Bogotá D.C. 2012. Pág. 64.

⁷⁰ CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 100 de 1980. 1980. artículo 279. Como se citó en: Coalición Colombiana Contra la Tortura. Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bogotá. 2009. Pág. 50.

⁷¹ PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Virgilio Barco Vargas. Decreto 180 de 1988. 1988. Artículo 24. Como se citó en: Coalición Colombiana Contra la Tortura. ibíd. Pág. 50.

⁷² CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. decreto 2266 de 1991. 1991.

⁷³ CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 589 de 2000 “Código Penal”. 2000.

Artículo 137. Tortura en persona protegida. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o síquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación, incurrirá en prisión de diez (10) a veinte (20) años, multa de quinientos (500) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años.⁷⁴

Menciona la Coalición Colombiana Contra la Tortura que estos artículos fueron revisados por la Corte Constitucional y declaró inexecutable la expresión “graves” incluida en los dos tipos penales en sentencia 148 de 2005:

Según el examen de la Corte, el legislador desconoció abiertamente la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, que omite exigir la existencia o la intensidad del dolor por el contrario, según la Corte, define la tortura como “cualquier acto que en los términos y para los fines allí señalados atente contra la autonomía personal, incluso si el mismo no causa sufrimiento o dolor”⁷⁵.

Úbeda-Portugués manifiesta que “aunque el Derecho Penal interno contempla la tipificación de los crímenes de tortura, el Comité contra la Tortura advierte que en la práctica, la imputación de crímenes de tortura no permite identificar claramente los casos de tortura como crimen específico y autónomo”⁷⁶.

2.2. Otras Disposiciones Acerca De La Tortura.

El Estado Colombiano al ratificar y aprobar los tratados y convenios internacionales para la prevención y protección de los actos de tortura y tratos o penas crueles está obligado a hacer las reformas normativas e institucionales pertinentes. Por lo anterior el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en el IV informe que rindió al Comité Contra la Tortura las reformas que se habían realizado al interior del país con miras de erradicar este fenómeno.

En la Ley 890 de 2004⁷⁷ se modifica y adiciona el Código Penal para aumentar las penas en una tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo; por lo que el delito de Tortura irá de ciento veintiocho a doscientos setenta meses.

⁷⁴ CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 599 de 2000 “Código Penal”. 2000. Artículos 178 y 137.

⁷⁵ CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia de Constitucional 148 de 2005. 22 de febrero de 2005. Como se citó en: Coalición Colombiana Contra la Tortura. Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bogotá. 2009. Pág. 48-50.

⁷⁶ ÚBEDA-PORTUGUÉS, José Escribano. Análisis del Informe del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas de 2009 sobre Colombia. En: Reflexión Política, vol. 12., núm. 23 (junio 2010); p. 24-33.

⁷⁷ CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 890 de 2004. 2004. Como se citó en: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, REPÚBLICA DE COLOMBIA. IV Informe

Por la especialidad de la función asignada a los miembros del cuerpo de Policía, de acuerdo con los múltiples pronunciamientos que al respecto ha efectuado la Corte Constitucional se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional en la Ley 1015 de 2006⁷⁸.

Señala el Ministerio de Relaciones Exteriores⁷⁹ que en la Ley 836 de 2003 se expide el reglamento del Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares, regulando el proceso disciplinario aplicable a los miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional; se establecen los principios que deben informar al mismo, las normas de conducta que deberán ser atendidas en medio de cualquier circunstancia de orden público.

Una de las más importantes es la Ley 734 de 2002 por la cual se expide el Código Disciplinario Único; El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó:

Esta norma buscó armonizar la legislación disciplinaria y dotarla de una estructura que garantice a sus destinatarios seguridad jurídica, además de agilizar los procedimientos. Amplía de manera importante el catálogo de conductas que constituyen faltas, y las gradúa de acuerdo con su gravedad. Con relación a las conductas que vulneran los derechos humanos, determina que aquellas que constituyen crímenes de lesa humanidad, como el genocidio, desaparición forzada, la tortura, las ejecuciones arbitrarias, los desplazamientos forzados y las privaciones ilegales de la libertad, se consideran como faltas gravísimas que se sancionan con la destitución y la inhabilidad, que va de 10 a 20 años, para ejercer la función pública. Lo anterior en concordancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos, de los cuales Colombia es Parte.⁸⁰

Periódico De Colombia Al Comité Contra La Tortura Sobre Los Progresos En La Aplicación De La Convención Contra La Tortura Y Otros Tratos O Penas Cruelles, Inhumanos O Degradantes. Bogotá D.C. 2012. Pág. 57.

⁷⁸ CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 1015 de 2006. 2006. Como se citó en: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ibíd. Pág. 56.

⁷⁹ CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 836 de 2003. 2003 como se citó en: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ibíd. Pág. 56.

⁸⁰ MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, REPÚBLICA DE COLOMBIA. IV Informe Periódico De Colombia Al Comité Contra La Tortura Sobre Los Progresos En La Aplicación De La Convención Contra La Tortura Y Otros Tratos O Penas Cruelles, Inhumanos O Degradantes. Bogotá D.C. 2012. Pág. 57.

3. ANÁLISIS DE LOS ACTOS DE TORTURA EN COLOMBIA.

Figueroa menciona que “sociedades acostumbradas a la violencia (como Guatemala, Colombia o el Perú), en las cuales antaño existieron vastos sectores que apoyaron con hechos, opiniones y aun pasividades, la ejecución de notables violaciones a los derechos humanos, pueden volver a hacerlo”⁸¹.

3.1. El Estado Como Principal Perpetrador De Actos De Tortura Y Tratos O Penas Cruels.

Menciona la Organización Mundial Contra La Tortura que para 1995 en un informe conjunto sobre Colombia por el Relator Especial encargado de la cuestión de la tortura y el Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, para la fecha establecieron acerca de la Tortura que:

La mayoría de los casos de tortura, que se ha generalizado, son obra de las fuerzas de seguridad y de los grupos paramilitares y otros grupos armados que trabajan paralelamente con ellas o como parte directa de sus campañas. La tortura puede usarse para obtener información, para arrancar confesiones o para aterrorizar. Puede aplicarse antes de dar muerte a las víctimas o hacerlas desaparecer.⁸²

En los casos de tortura entre el 2003 y 2009 según Coalición Colombiana Contra la Tortura “el 90.59% de los casos está comprometida la responsabilidad del Estado por perpetración directa, o por omisión o aquiescencia al accionar de los grupos paramilitares, y el 9.41% se atribuye a grupos rebeldes”⁸³.

En el 2010 y 2011 siguió la práctica de estos actos por parte de la Fuerza Pública, por lo que en un informe realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se expresa con preocupación:

La oficina en Colombia continuó registrando casos de tortura por miembros de la fuerza pública y observó con gran preocupación la repetida ocurrencia de esta violación en departamentos como Antioquia, Arauca, Caquetá, Meta, Valle del Cauca y Vichada. Preocupa en particular la situación en Medellín, donde varias personas, incluyendo presuntos delincuentes, habrían sido víctimas de tortura y malos tratos de forma reiterada. Varias personas bajo custodia policial sufrieron castigos físicos y

⁸¹ FIGUEROA Ibarra, Carlos. Dictaduras, Terror y Torturas en América Latina. En: Bajo el Volcán. Vol.; 2. No.3 (jul-dic 2001). pág. 20.

⁸² COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. Informe conjunto del Relator Especial encargado de la cuestión de la tortura, Sr. Nigel S. Rodley y del Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. Bacre Waly Ndiaye, sobre su visita a Colombia, documento E/CN.4/1995/111, 1994. Como se citó en: ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA. Violencia Estatal En Colombia: Un Informe Alternativo Presentado Al Comité Contra Tortura De Las Naciones Unidas. Ginebra. 2004. Pág. 19.

⁸³ COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Boletín informativo. Bogotá. 2014. Pág. 1.

psicológicos, en ocasiones acompañados de insultos racistas. Los maltratos consistieron, entre otros, en golpes en varias partes del cuerpo, mediante puñetazos y patadas o con armas de dotación, así como descargas eléctricas, quemaduras, aspersión con gas pimienta y asfixia con bolsas de plástico.⁸⁴

Según la Coalición Colombiana Contra La Tortura de los 1350 casos en los que se conoce el presunto autor genérico de las torturas:

El 90,59% de los casos se compromete la responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 41,93% (566 torturas); y, por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 48,67% (657 torturas). A las guerrillas se les atribuyó la autoría en el 9,41% de los casos (127 torturas).⁸⁵

Para la Coalición Colombiana Contra la Tortura⁸⁶ durante los dos periodos de gobierno del Expresidente Álvaro Uribe Vélez y la política de Seguridad Ciudadana se presentó un aumento de las violaciones a los derechos humanos y aseguró que se dio bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo.

La Coalición Colombiana Contra la Tortura asegura por otra parte que la Procuraduría General de la Nación manifestó que a “8 de junio de 2009 tiene a su cargo 223 investigaciones disciplinarias por el delito de tortura atribuidos a funcionarios públicos por hechos ocurridos entre los 2002 y 2009”⁸⁷ y además entregó otras cifras como son:

según las características o el tipo de tortura en 31,4% (70/223) de los casos de tortura se infligen en el marco de privaciones de la libertad, ya sea estas arbitrarias, en centros de reclusión transitorios o definitivos. En por lo menos un 11,4% (8/70) de estas privaciones de la libertad las víctimas han sido torturadas como mecanismo para obtener información sobre la comisión de algún delito o para llevar a la confesión de los mismos. Del total de casos, el 13% (29/223 casos) de las torturas se han perpetrado previas a la ejecución extrajudicial de las víctimas atribuidas presuntamente a la fuerza pública. Por último, en 5,8% (13/223 casos) se relacionan explícitamente hechos constitutivos de tortura psicológica.⁸⁸

⁸⁴ ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Doc. A/HRC/16/22. 2011. Como se citó en: COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe de Seguimiento a las recomendaciones del comité contra la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas, Colombia 2009-2010. Bogotá D.C. 2011. pág. 11.

⁸⁵ COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe de Seguimiento a las recomendaciones del comité contra la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas, Colombia 2009-2010. Bogotá D.C. 2011. pág. 10.

⁸⁶ COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bogotá. 2009. pág. 12.

⁸⁷ COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bogotá. 2009. pág. 67.

⁸⁸ COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bogotá. 2009. pág. 68.

También la Coalición Colombiana Contra la Tortura indago en las cárceles del país y encontró que según la oficina de control disciplinario interno del INPEC en 2007 y 2008:

ha registrado 79 faltas disciplinarias documentadas de maltrato físico y verbal en contra de las y los internos. Entre ellas destacan: fracturas, golpes, aplicación del escorpión (esposado de manos y pies), amenazas de muerte, obligación a desnudarse, no permitir atención médica, acoso sexual, agresión y maltrato verbal a los visitantes. La mayoría de los casos han sido remitidos por competencia y sólo en dos se ha abierto una investigación disciplinaria, lo cual evidencia el alto nivel de impunidad.⁸⁹

3.2. Los actos de Tortura en Colombia una Práctica Generalizada y Sistemática.

Para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia “la tortura se ha convertido en una práctica sistemática y recurrente de terror”⁹⁰. Manifiesta Úbeda-Portugués que el Comité contra la Tortura ha expresado constantemente su preocupación por los altos índices de Tortura siendo generalizada, y precisó que “si bien los grupos armados ilegales tienen una importante responsabilidad en dichas violaciones de los derechos humanos sigue denunciando la aquiescencia o la participación de agentes del Estado en tales actos”⁹¹.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, ha dicho que “Las violaciones de los derechos humanos se producen en un marco reiterado de prácticas graves, masivas y sistemáticas... Las infracciones al derecho internacional humanitario representan igualmente una práctica generalizada y a gran escala”⁹². Reitera la Organización Mundial Contra La Tortura que: “puede apreciarse que en Colombia se cumplen todos los elementos de la definición expuesta por el Comité y que la tortura se comete de una manera sistemática y generalizada, situación que no es nueva y que,

⁸⁹ COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bogotá. 2009. pág. 32.

⁹⁰ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Informe Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia, Doc. E/CN.4/2000/11. 2000. como se citó en: ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA. Violencia Estatal En Colombia: Un Informe Alternativo Presentado Al Comité Contra Tortura De Las Naciones Unidas. Ginebra. 2004. Pág. 15.

⁹¹ ÚBEDA-PORTUGUÉS, José Escribano. Análisis del Informe del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas de 2009 sobre Colombia. En: Reflexión Política, vol. 12., núm. 23 (junio 2010); pág. 5.

⁹² ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 28 de febrero de 2002, documento E/CN.4/2002/17. 2002. Como se citó en: ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA. Ibid. Pág. 15.

por el contrario, se viene presentando desde hace muchos años”⁹³. Agrega la Coalición Colombiana Contra la Tortura que:

Además de ser sistemática, la práctica de la tortura en Colombia tiene carácter generalizado, pues a pesar del subregistro, se han documentado casos en casi todo el territorio nacional. Así entre julio de 2003 y junio de 2008, se registraron hechos de tortura en 30 de los 33 departamentos colombianos¹⁰. En términos absolutos los mayores registros de tortura física se reportan en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Cauca y Magdalena⁹⁴.

La Coalición Colombiana Contra la Tortura muestra que las cifras de tortura y tratos o penas crueles en Colombia son alarmantes, una primeras cifras del 2001 al 2009 indican que:

por lo menos 1834 personas fueron víctimas de tortura. De ellas, 422 quedaron con vida, 1148 fueron asesinadas y 264 fueron víctimas de tortura psicológica. A 2014 se han reportado más de 26.000 desapariciones forzadas, en los últimos 14 años se han denunciado 63.183 eventos de amenazas, cientos de detenciones arbitrarias, 773 casos de tortura registrados en Justicia y Paz, más de 500.000 víctimas de violencia sexual y cerca de 5'000.000 de personas desplazadas.⁹⁵

Luego la Coalición Colombiana contra la Tortura arroja otras cifras, aún más preocupantes y más explícitas, pero en el período del 2003 al 2009, en el que establecen:

Fueron víctimas de torturas por lo menos 899 personas, de las cuales 229 quedaron con vida, 502 fueron asesinadas y 168 fueron víctimas de tortura psicológica. Del total de casos registrados en los que se conoce el sexo (793 víctimas), el 86,3% (685) fueron hombres, y el 13,6% (108) eran mujeres... En los casos en los que se conoce la edad de la víctima (296), el 30,4% (90) eran niñas y niños⁴ y el 26,3% (78) eran jóvenes. En los casos en los cuales se conoce el presunto autor genérico (666 víctimas), en el 92,6% del total de los casos se compromete la responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 50,6% (337 víctimas); y por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 42% (280 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la autoría del 7,4% de los casos (49 víctimas). Durante el período en estudio, el número de víctimas de tortura se redujo en un 43,56%, respecto a los 1.593 casos documentados entre julio de 1998 y junio de 2003.⁹⁶

3.3. Fines y Patrones de los Actos de Tortura en Colombia.

La Organización Mundial Contra La Tortura concluyó que en Colombia los fines para la aplicación de actos de Tortura y tratos o penas crueles son de diversa

⁹³ ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA. Ibíd. Pág. 9.

⁹⁴ COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bogotá. 2009. Pág. 13.

⁹⁵ COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Boletín informativo. Bogotá. 2014. Pág. 1.

⁹⁶ COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Boletín informativo. Bogotá. 2014. Pág. 9-10.

índole y establece ciertas características en cada fin por la que los actos de tortura fueron implementados como fueron:

La tortura como medio para conseguir información

Esta modalidad de acción es especialmente característica de la Fuerza Pública. En la mayoría de estos casos se trata de buscar información sobre las guerrillas a través de la población civil a la que sindicaron de ser colaboradora de estos grupos. En otros casos se pretende obtener confesiones o presionar a las personas para que se autoinculpen como miembros de la guerrilla.

La tortura como medio de persecución política

En muchos casos la tortura es utilizada por los actores del conflicto armado como una forma de persecución en contra de las personas que consideran sus opositores. Se trata de penalizar la actividad política o social de las víctimas, al tiempo que se busca intimidarlas para que abandonen dichas actividades.

La tortura como medio para atemorizar a la población civil

La tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes son utilizados también como mecanismo para atemorizar a la población civil, con el propósito de enviarle un mensaje claro a la comunidad en general para que haga o deje de hacer algo. Esta práctica es especialmente recurrente en los hechos perpetrados por paramilitares. En este sentido, la Alta Comisionada de Naciones

En cuanto a la violencia sexual contra las mujeres mediante los actos de tortura o tratos crueles la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, en su informe sobre la visita a Colombia realizada entre el 1 y el 7 de noviembre de 2001, señaló que “aunque los hombres son más frecuentemente víctimas de ejecuciones sumarias y matanzas, la violencia contra la mujer, en particular la violencia sexual perpetrada por grupos armados, se ha hecho habitual en medio de un conflicto que degenera paulatinamente y de la falta de observancia del derecho internacional humanitario”.⁹⁷

Por su parte la Coalición Colombiana contra la Tortura ha identificado patrones en lo concerniente a la comisión de actos de tortura teniendo en cuenta tres factores como son la condición de la víctima, la intencionalidad del perpetrador, y el contexto de ocurrencia de estos crímenes; los patrones establecidos son:

- Como medio de persecución política
- En el marco de detenciones
- Con el propósito de obtener una confesión o información
- Como método de sometimiento de la población carcelaria
- Como mecanismo de discriminación

⁹⁷ ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA. Ibíd. Pág. 19-28.

- Como forma de control social y para sembrar terror en las comunidades
- Como instrumento de represión de la protesta social
- Como método de sometimiento contra las personas secuestradas
- Como parte de la instrucción de miembros de la fuerza pública

En 1998 el Relator Especial⁹⁸ sobre la Tortura reiteró la recomendación que ya había hecho para 1994 en el que le indicaba al gobierno nacional que recordara su obligación con la comunidad internacional de realizar investigaciones exhaustivas e imparciales cualquier caso de tortura, para identificar, enjuiciar y castigar a los responsables, otorgar una indemnización adecuada a las víctimas o a sus familias y adoptar todas las medidas apropiadas para que no se repitan tales actos.

3.4. Otras cifras de Tortura y tratos o penas crueles en Colombia.

La información recolectada por la Coalición Colombiana Contra La Tortura para la realización de un Informe Alternativo al 4° Informe Periódico Del Estado Colombiano que se presentó al Comité Contra La Tortura en el 2009; indica que según la Dirección Nacional de la Fiscalía General de la Nación adelanta actualmente 10.545 investigaciones por el delito de tortura y describe que:

el 99,3% (10.471) corresponde al tipo general de tortura y 0,7% (74) al tipo penal aplicable en el marco del conflicto armado... Por su parte, a mayo de 2009, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Fiscalía adelantaba 38 investigaciones por el delito de tortura por hechos ocurridos entre 1986 y 2008 en 17 departamentos. Respecto de estas investigaciones, solamente en 8 casos se ha dictado sentencia condenatoria. En estas sentencias se ha atribuido la responsabilidad a la fuerza pública (3 casos), a los grupos paramilitares (3 casos) y a los grupos guerrilleros (2 casos).⁹⁹

También la Coalición Colombiana Contra la Tortura encontró que en lo relacionado con el procedimiento reportaron que “el 97,6% (10.292) de las investigaciones corresponden con el procedimiento penal anterior mientras el 2,4% (253) son tramitadas a través del procedimiento penal acusatorio”¹⁰⁰. Por otra parte la Coalición estableció que las cifras de investigaciones por el delito de tortura en contra de persona protegida no son más alentadoras y menciona que:

⁹⁸ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Informe del Relator Especial sobre la Tortura, seguimiento a las recomendaciones de la visita a Colombia en 1994, E/CN.4/1998/38.. En el 54 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. 1998. Como se citó en: ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA. Ibíd. Pág. 38.

⁹⁹ COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe Alternativo Al 4° Informe Periódico Del Estado Colombiano Al Comité Contra La Tortura: Resumen Ejecutivo. Bogotá D.C. 2009. pág. 6.

¹⁰⁰ COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe Alternativo Al 4° Informe Periódico Del Estado Colombiano Al Comité Contra La Tortura: Resumen Ejecutivo. Bogotá D.C. 2009. pág. 51.

La Dirección Nacional de Fiscalías informó que del total de investigaciones por el delito de tortura (10.545), sólo el 0,7% (74) corresponden con este tipo penal. Por lo tanto, no se está investigando de manera exhaustiva la tortura como infracción al derecho internacional humanitario a pesar de que es de uso reiterado por todos los grupos armados que participan en las hostilidades.¹⁰¹

Frente a los casos de violación sexual como forma de tortura, refiere la Coalición que “cuando la tortura ha ocurrido mediante un ataque a la identidad primaria (el cuerpo), además del control de los cuerpos mismos, se pretende un dominio de la vida del colectivo, de las familias y de los individuos en su subjetividad”¹⁰². La Comisión Colombiana de Juristas registró entre el 2001 y el 2009 que:

Ocurrieron al menos 118 casos de violencia sexual en el contexto de la violencia sociopolítica en Colombia. En 111 casos, las víctimas son mujeres; en 6, varones y en uno, no se identificó el sexo de la víctima. En 58 casos se conoce la edad de la víctima cuando es mujer; de ellos 37 son niñas, 10 son jóvenes y 11 son adultas²¹. Es decir que en el 81,03% de los casos en los cuales se conoce la edad, la víctima es menor de 25 años.¹⁰³

En cuanto a actos de tortura en el que las víctimas son personas LGBT la Coalición estableció que:

son víctimas de violación a sus derechos humanos, y particularmente al derecho a la integridad personal. En 2006 y 2007, Colombia Diversa registró 67 homicidios de personas LGBT⁴⁶ y hechos de tortura y/o tratos, crueles, inhumanos o degradantes en contextos de: a) abuso policial, b) establecimientos carcelarios c) y particularmente en casos de homicidios de hombres gays.¹⁰⁴

3.5. Observaciones Al Desarrollo De La Tortura Y Tratos O Penas Crueles En Colombia.

Como se ha podido observar, diferentes organizaciones a nivel internacional y nacional revisan y estudian cómo se está desarrollando la tortura y tratos o penas crueles en Colombia con miras a realizar recomendaciones, hacer denuncias o simplemente para tener un diagnóstico frente al fenómeno. A

¹⁰¹ COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe Alternativo Al 4° Informe Periódico Del Estado Colombiano Al Comité Contra La Tortura: Resumen Ejecutivo. Bogotá D.C. 2009. pág. 53.

¹⁰² COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bogotá. 2009. pág., 97.

¹⁰³ COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe de Seguimiento a las recomendaciones del comité contra la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas, Colombia 2009-2010. Bogotá D.C. 2011. pág. 15.

¹⁰⁴ COLOMBIA DIVERSA. Como es citado en: COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe Alternativo Al 4° Informe Periódico Del Estado Colombiano Al Comité Contra La Tortura: Resumen Ejecutivo. Bogotá D.C. 2009. pág. 13.

continuación se mostrará cuáles han sido esas observaciones y en qué aspectos.

Para empezar el Código penal contiene la tipificación de delitos de tortura pero al Comité contra la Tortura le preocupa que:

en la práctica, la imputación de crímenes de tortura no permite identificar claramente los casos de tortura como crimen específico y autónomo ya que estos delitos se subsumen en las agravantes de otros delitos conexos que se consideran más graves por los operadores judiciales. Asimismo, le preocupa al Comité que se realicen tipificaciones erróneas asimilando el delito de tortura a tipos penales de menor gravedad como el delito de lesiones personales que no exige probar la intencionalidad del perpetrador. Al Comité le preocupa que estas prácticas resulten en un grave subregistro de los casos de tortura y conlleven impunidad por dichos crímenes (arts. 1, 2 y 4 de la Convención).¹⁰⁵

Agrega la Coalición Colombiana Contra la Tortura que otra de las dificultades en la investigación de la tortura en Colombia se presenta en:

la ausencia de diferenciación entre los tipos penales de lesiones personales y tortura, por lo menos en lo concerniente a los casos de tortura física.

Así, es frecuente que las autoridades judiciales realicen investigaciones por el delito de lesiones personales por hechos que, por las intenciones del perpetrador, por la condición de la víctima o la gravedad de los malos tratos, puedan constituir tortura.¹⁰⁶

Úbeda-Portugués señala que una problemática importante es que: “algunas investigaciones de casos de tortura sigan siendo realizadas solamente en las jurisdicciones administrativas, disciplinarias y militares, sin tener en cuenta la jurisdicción penal”¹⁰⁷.

Para el Comité contra la tortura frente a los desmovilizados de la responsabilidad penal de grupos armados ilegales, entre estos 30.000 paramilitares, falta un marco jurídico adecuado y:

Los beneficios jurídicos otorgados por la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) y el Decreto 128 de 2003 no coinciden con el principio de la proporcionalidad de la pena y la

¹⁰⁵ COMITÉ CONTRA LA TORTURA. Examen De Los Informes Presentados Por Los Estados Partes En Virtud Del Artículo 19 De La Convención: Observaciones Finales Del Comité Contra La Tortura. En: Comité Contra La Tortura, 43º período de sesiones (Ginebra, 2 a 20 de noviembre de 2009). pág. 2.

¹⁰⁶ COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bogotá. 2009. pág. 57-58.

¹⁰⁷ ÚBEDA-PORTUGUÉS, José Escribano. Análisis del Informe del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas de 2009 sobre Colombia. En: Reflexión Política, vol. 12., núm. 23 (junio 2010); p. 24-33.

ausencia de condenas indica una amnistía *de facto* en contravía con las obligaciones internacionales de derechos humanos.¹⁰⁸

En el 2004 el Comité contra la Tortura advirtió que la jurisdicción penal militar continuaba conociendo casos de tortura y menciono “tribunales militares seguirían realizando investigaciones sobre delitos excluidos totalmente de su competencia, como los delitos de tortura, genocidio y desaparición forzada, en los que supuestamente estarían implicados miembros de la fuerza pública”¹⁰⁹. Por lo que la Organización Mundial contra la Tortura hizo un llamado manifestando que:

La intención de continuar conociendo casos de tortura por la jurisdicción penal militar se ha hecho evidente en varios casos. Uno de ellos corresponde con las torturas físicas, psicológicas y sexuales infligidas a 21 soldados durante un entrenamiento militar en el Centro de Instrucción y Entrenamiento de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, el 25 de enero de 2006, en el municipio de Piedras (Tolima).¹¹⁰

La Coalición Colombiana sobre la problemática de la jurisdicción penal militar en casos de los cuales no debería conocer afirmó que:

A pesar de que la jurisprudencia de la Corte Constitucional establece que la jurisdicción penal militar no es competente en casos de violaciones de derechos humanos, la justicia militar sigue conociendo casos en los que se cometió o se pudo haber cometido tortura... preocupa que esta competencia se siga ejerciendo también en otros casos de graves violaciones a los derechos humanos que pueden haber implicado la comisión de tortura o malos tratos, como los casos de ejecuciones extrajudiciales.¹¹¹

La Coalición Colombiana Contra la Tortura ha manifestado que pese a las visitas y recomendaciones realizadas por las diferentes organizaciones internacionales, hay una “preocupación por la falta de avances significativos en la generación de políticas contra este flagelo”¹¹². Actualmente el Estado

¹⁰⁸ COMITÉ CONTRA LA TORTURA. Examen De Los Informes Presentados Por Los Estados Partes En Virtud Del Artículo 19 De La Convención: Observaciones Finales Del Comité Contra La Tortura. En: Comité Contra La Tortura, 43º período de sesiones (Ginebra, 2 a 20 de noviembre de 2009). pág. 4.

¹⁰⁹ COMITÉ CONTRA LA TORTURA. CAT/C/CR/31/1, numeral 10, literal d, apartado iii. 4 de febrero de 2004. Como se citó en: COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bogotá. 2009. pág. 60.

¹¹⁰ ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA. “Colombia: Torturas y malos tratos en contra de varios soldados”, Llamado urgente 230206, Ginebra, 23 de febrero de 2006. Como se citó en: COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bogotá. 2009. pág. 61.

¹¹¹ COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe Alternativo Al 4º Informe Periódico Del Estado Colombiano Al Comité Contra La Tortura: Resumen Ejecutivo. Bogotá D.C. 2009. pág. 7.

¹¹² COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Boletín informativo. Bogotá. 2014. pág. 2.

Colombiano se ha negado a ratificar el protocolo facultativo de la Convención Contra la Tortura y ha manifestado que:

el Gobierno considera que Colombia es un Estado garantista en la materia de tortura, y ha venido desplegando grandes esfuerzos institucionales con el fin de fortalecer los mecanismos de prevención de la misma, mostrando su plena convicción en la necesidad de erradicar este fenómeno, y en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el escenario internacional, por lo cual no considera necesaria la ratificación del Protocolo Facultativo.¹¹³

Aunque en la respuesta de Colombia se expresa que es un Estado garantista, lo cierto es que existe una atmosfera de impunidad frente a los actos de tortura tal como lo afirma Organización Mundial Contra La Tortura que asegura:

La impunidad es una de las características de la grave crisis de derechos humanos en el país. La gran mayoría de las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario no son investigadas o juzgadas y, cuando se abren investigaciones, estas no conducen a la identificación de los responsables.¹¹⁴

La Coalición Colombiana contra la Tortura también asegura que hay una ausencia de una investigación exhaustiva de la tortura en la jurisdicción ordinaria y dice que: “la Dirección Nacional de Fiscalías informó que tenía a su cargo 10.545 investigaciones por el delito de tortura, de las cuales el 99,3% (10.471) corresponden al tipo general de tortura y 0,7% (74) al aplicable en el conflicto armado”¹¹⁵. Agrega el Comité Contra la Tortura expresa:

gran preocupación por la falta de información fidedigna sobre los casos de tortura y las fases procesales en las cuales se encuentran estos. Asimismo preocupa la carencia de investigaciones penales realizadas por la Fiscalía General de la Nación, el número limitado de casos que hayan llegado a la fase de juicio y que no se asignen todos los casos pertinentes a su Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.¹¹⁶

¹¹³ PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DDHH Y DIH, de la Presidencia de la República. Respuesta del director del a un oficio dirigido por la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, sobre la adopción del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, diciembre 21 de 2010, OFI 10-00120084/JMSC 34020. Como se citó en: COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe de Seguimiento a las recomendaciones del comité contra la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas, Colombia 2009-2010. Bogotá D.C. 2011. pág. 65.

¹¹⁴ ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA. Violencia Estatal En Colombia: Un Informe Alternativo Presentado Al Comité Contra Tortura De Las Naciones Unidas. Ginebra. 2004. pág. 84.

¹¹⁵ COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bogotá. 2009. pág. 50.

¹¹⁶ COMITÉ CONTRA LA TORTURA. Examen De Los Informes Presentados Por Los Estados Partes En Virtud Del Artículo 19 De La Convención: Observaciones Finales Del Comité Contra La Tortura. En: Comité Contra La Tortura, 43º período de sesiones (Ginebra, 2 a 20 de noviembre de 2009). pág. 3.

4. ESPACIOS PROPICIOS PARA LOS ACTOS DE TORTURA Y TRATOS O PENAS CRUELES: CONFLICTO ARMADO INTERNO Y HACINAMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO.

Colombia es un Estado que en particular vive dos fenómenos sociales de gran impacto y por varios años en el que se han presentado múltiples vulneraciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario; para empezar hace más de 50 años sufre de un Conflicto Armado Interno y además hace más de 20 años padece de una Crisis Carcelaria y Penitenciaria por Hacinamiento.

En el presente Capítulo se explicara en qué consiste cada fenómeno y en especial se busca explicar cómo estos son espacios propicios para que se presenten actos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.

4.1. Contexto General Del Conflicto Armado Interno.

En la Red Nacional de Información¹¹⁷ de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas se registra en la actualidad 7.201.034 de víctimas. Granad, Restrepo y Vargas manifiestan sobre este fenómeno que:

La guerra en Colombia es un fenómeno de larga duración, variable intensidad y gran heterogeneidad en la violencia. En esta contienda se han enfrentado, durante la mayor parte del tiempo, tres polos: las guerrillas, las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares. La interacción de estos grupos con otras formas de actividad criminal es compleja, por lo que en este capítulo no nos referiremos sino marginalmente al tema.¹¹⁸

La Comisión Histórica Del Conflicto Y Sus Víctimas señaló que anterior al inicio del conflicto se vivió un momento de paz y describió esa época:

Sin embargo, tras la última guerra civil tradicional, la llamada Guerra de los Mil días (1899-1902), el país vivió un período extenso de relativa calma, casi medio siglo, salpicado aquí y allá por episódicos hechos de violencia (como la Masacre de las Bananeras o las víctimas de la violencia sectaria tras el fin de la hegemonía conservadora)... No obstante, a fines de los años cuarenta Colombia terminaría sumergida en un nuevo período de violencia, la Violencia (en mayúsculas).¹¹⁹

¹¹⁷ RED NACIONAL DE INFORMACIÓN. Unidad para la atención y Reparación Integral a las Víctimas a corte de 1 de Febrero de 2015.

¹¹⁸ GRANAD, Soledad; RESTREPO, Jorge y VARGAS, Andrés. El agotamiento de la política de seguridad: evolución y transformaciones recientes en el conflicto armado colombiano. En: Guerra y violencias en Colombia: Herramientas e interpretaciones. Primera edición. Bogotá D.C. 2009. Pág. 12.

¹¹⁹ COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y SUS VÍCTIMAS. Contribución al Entendimiento del conflicto armado en Colombia. Bogotá D.C. 2015. Pág. 13-14.

El Centro De Memoria Histórica en un estudio minucioso del conflicto, teniendo en cuenta el carácter cambiante del conflicto armado, de sus protagonistas y de sus contextos; identificó cuatro periodos en su evolución, que son:

El primer período (1958-1982) marca la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, caracterizada por la proliferación de las guerrillas que contrasta con el auge de la movilización social y la marginalidad del conflicto armado.

El segundo período (1982-1996) se distingue por la proyección política, expansión territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de los grupos paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la irrupción y propagación del narcotráfico, el auge y declive de la Guerra Fría junto con el posicionamiento del narcotráfico en la agenda global, la nueva Constitución Política de 1991, y los procesos de paz y las reformas democráticas con resultados parciales y ambiguos.

El tercer periodo (1996-2005) marca el umbral de recrudescimiento del conflicto armado. Se distingue por las expansiones simultáneas de las guerrillas y de los grupos paramilitares, la crisis y la recomposición del Estado en medio del conflicto armado y la radicalización política de la opinión pública hacia una solución militar del conflicto armado. La lucha contra el narcotráfico y su imbricación con la lucha contra el terrorismo renuevan las presiones internacionales que alimentan el conflicto armado, aunado a la expansión del narcotráfico y los cambios en su organización.

El cuarto periodo (2005-2012) marca el reacomodo del conflicto armado. Se distingue por una ofensiva militar del Estado que alcanzó su máximo grado de eficiencia en la acción contrainsurgente, debilitando pero no doblegando la guerrilla, que incluso se reacomodó militarmente.¹²⁰

Indica el Centro De Investigación Y Educación Popular que para poder entender la dinámica del conflicto armado en Colombia es necesario prestar atención a un factor muy importante como es la guerra que libran los actores armados de manera paralela a su accionar bélico, y describe:

aunque estrechamente conectadas a este. Nos referimos a las infracciones del DIH, cometidas por los distintos actores armados de la población civil. Los años más difíciles (...) se dieron en los años 2000 y 2001 con 2.291 y 2.277 infracciones al DIH respectivamente, y 4.431 y 5744 víctimas fatales entre asesinatos políticos, masacres y desapariciones. Los más de tres millones de desplazados son otro indicador claro de esta guerra contra la sociedad.¹²¹

¹²⁰ CENTRO DE MEMORIA HISTORICA. Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado. Capítulo II. Bogotá D.C. 2013. Pág. 2.

¹²¹ CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN POPULAR. El conflicto armado colombiano: ¿El fin del fin?. Informe Especial. Bogotá D.C. 2008. Pág. 13.

Guáqueta afirma de manera breve que: “las guerrillas surgieron como una protesta contra la exclusión política y socioeconómica expresada a través de una propuesta armada de izquierda”¹²².

Para establecer cómo es el dinamismo del conflicto armado hay que tener en cuenta aspectos recurrentes y aparecen de manera reiterada en los diagnósticos que lo describen como asegura el Centro de Memoria Histórica que manifiesta:

se cuentan la concentración de la tierra que impide resolver el problema agrario; la presencia desigual del Estado en las periferias del país, aunado a una integración territorial precaria y un creciente abandono del país rural; la prevalencia de una economía extractiva que no solo desconoce los derechos de sus legítimos e históricos propietarios, sino que depreda, arrasa y acumula sin generar un desarrollo social sostenible.¹²³

Por su parte Comisión Histórica Del Conflicto Y Sus Víctimas indica que los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto son:

1. El narcotráfico.
2. Patrones de violencia contra los civiles: el papel del secuestro y la extorsión.
3. Precariedad institucional.
4. La provisión privada de la coerción/seguridad.
5. Armas y urnas.
6. Sistema político clientelista-localista.
7. Inequidad, derechos de propiedad y cuestión agraria.
8. El círculo vicioso de la violencia.¹²⁴

4.2. Conflicto Armado Interno: Más de 50 Años de una Violencia.

Un conflicto armado interno es reconocido por la comunidad internacional como un estado de macro vulneración de Derechos Humanos, y Colombia hace más de 50 años se encuentra en ese estado, sin olvidar que anterior a este ha vivido múltiples episodios de violencia.

Según el Grupo de Memoria Histórica en el período comprendido entre 1981 y el 2012 se documentaron 588 eventos de violencia en los cuales hubo huellas o marcas de sevicia en los cuerpos de 1.530 personas, además agrega: “de la

¹²² GUÁQUETA, Alexandra. Dimensiones Políticas Y Económicas Del Conflicto Armado En Colombia: Anotaciones Teóricas Y Empíricas. En: seminario: La economía política del conflicto colombiano (16 de agosto de 2002). Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Pág. 13.

¹²³ CENTRO DE MEMORIA HISTORICA. Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado. Capítulo II. Bogotá D.C. 2013. Pág. 83.

¹²⁴ COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y SUS VÍCTIMAS. Contribución al Entendimiento del conflicto armado en Colombia. Bogotá D.C. 2015. Pág. 6.

totalidad de los casos de sevicia 51.433 fueron asesinatos selectivos y 154 masacres”¹²⁵. Además agregó que:

Se registraron huellas de inmovilización y causación de dolor sobre el cuerpo de las víctimas, que incluían el uso de cuerdas o cables sobre manos y pies de las víctimas, mordazas o vendajes en los ojos, cortes y laceraciones en distintas partes del cuerpo o señales de golpes. También se entiende por tortura los tratos crueles y degradantes a la víctima antes de ser asesinada en presencia de otros: el uso de cuerdas para estrangular; el uso de bolsas plásticas para provocar asfixia (tal y como se documentó en la masacre paramilitar de El Salado en febrero del 2000); el uso de sopletes para quemar la piel; el uso de agua a presión sobre nariz y boca; la provocación de cortes en la piel con cortaúñas, o la extracción violenta de las uñas, tal y como se documentó en la masacre de Trujillo entre marzo y abril de 1990; así como otras tantas prácticas de miembros de la Fuerza Pública que fueron documentadas en el caso de la ATCC entre 1976 y 1978.¹²⁶

El Grupo de Memoria Histórica estableció que: “del total de 588 eventos con episodios de sevicia y crueldad extrema, 371 (63%) fueron atribuidos a los grupos paramilitares; 126 (21,4%), a grupos armados no identificados; 57 (9,7%), a miembros de la Fuerza Pública; 30 (5,1%), a las guerrillas; y 4 (0,7%), a grupos paramilitares y Fuerza Pública en acciones conjuntas”¹²⁷. Y Define el Grupo de Memoria la sevicia como: “la causación de lesiones más allá de las necesarias para matar. Es decir, es el exceso de la violencia y la crueldad extrema que tiene como expresión límite el cuerpo mutilado y fragmentado”¹²⁸.

Otro Período cruel del conflicto se dio después del Bogotazo; menciona Jiménez Becerra que pasado este suceso en el área urbana “se inicia el período de la violencia política en el escenario rural (1948-1965), en el que las imágenes del terror serían más espantosas y la fotografía sería un insumo fundamental para dar cuenta de dicha experiencia”¹²⁹. Y en una Investigación encaminada a mostrar en imágenes la crueldad del conflicto Jiménez Becerra manifiesta que el objeto de su trabajo es: “establecer la relación que existe entre la imagen, el imaginario y la memoria de la violencia política, entre 1948 y 1965”¹³⁰.

¹²⁵ GRUPO DE MEMORIA HISTORICA. ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Informe General. Bogotá D.C. 2013. pág. 55.

¹²⁶ GRUPO DE MEMORIA HISTORICA. ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Informe General. Bogotá D.C. 2013. Pág. 57.

¹²⁷ GRUPO DE MEMORIA HISTORICA. ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Informe General. Bogotá D.C. 2013. Pág. 56.

¹²⁸ GRUPO DE MEMORIA HISTORICA. ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Informe General. Bogotá D.C. 2013. Pág. 55.

¹²⁹ JIMÉNEZ BECERRA, Absalón. El Periodo De La Violencia En Colombia Y El Uso De Las Imágenes Del Terror, 1948-1965. Revista de Antropología Experimental nº 13; Texto 11 (2013); pág. 48.

¹³⁰ JIMÉNEZ BECERRA, Absalón. El Periodo De La Violencia En Colombia Y El Uso De Las Imágenes Del Terror, 1948-1965. Revista de Antropología Experimental nº 13; Texto 11 (2013); pág. 47.

De los actos de tortura y tratos o penas crueles más fuertes documentados en imágenes por Jiménez Becerra están los siguientes:

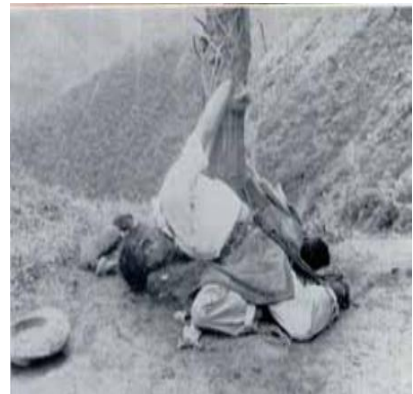
Bocachiquear: la tortura consistía en realizar cortadas superficiales sobre el cuerpo de la víctima para que se desangrara lentamente. La palabra viene de la manera como preparan el pez “bocachico”; los pescadores y campesinos, acostumbran sajarlo para poderlo comer.¹³¹



La maternidad frustrada. Para no dejar no la semilla las mujeres próximas al alumbramiento son bárbaramente asesinadas, les hacen la cesárea cambiándoles el feto por un gallo como sucedió en Virginia (Antioquia) y en Colombia (Huila), o le arrancan el hijo despedazándolo en su presencia. El crimen finaliza exterminando a la mujer como principio de vida y al niño como suprema creación de amor.¹³²



El cristo campesino: era una de las torturas más comunes consistía en amarrar a la víctima, la mayoría hombres, con los brazos por detrás y violar a las mujeres de la casa en su presencia. Los victimarios proferían palabras soeces, amenazas y maldiciones. Se degradaba a la víctima con el objeto de deshumanizarla y así poderla sacrificar. La víctima generalmente se mataba con uno o varios tiros de gracia en la cabeza o en el pecho.¹³³



¹³¹ JIMÉNEZ BECERRA, Absalón. El Periodo De La Violencia En Colombia Y El Uso De Las Imágenes Del Terror, 1948-1965. Revista de Antropología Experimental nº 13; Texto 11 (2013); pág. 11.

¹³² JIMÉNEZ BECERRA, Absalón. El Periodo De La Violencia En Colombia Y El Uso De Las Imágenes Del Terror, 1948-1965. Revista de Antropología Experimental nº 13; Texto 11 (2013); pág. 12.

¹³³ JIMÉNEZ BECERRA, Absalón. El Periodo De La Violencia En Colombia Y El Uso De Las Imágenes Del Terror, 1948-1965. Revista de Antropología Experimental nº 13; Texto 11 (2013); pág. 13.

Sostiene el Grupo de Memoria Histórica que las huellas de la tortura quedaron impresas sobre el cuerpo lacerado de las víctimas agregó que: “La tortura se convirtió en un hecho simultáneo en 1.123 de las 16.340 acciones de asesinato selectivo (6,8%) documentados por el GMH entre 1980 y 2012, así como en 244 de las 1.982 masacres (12,3%). Por su parte, el RUV registró 4.151 víctimas de tortura entre 1985 y el 2012”¹³⁴.

Tal era la crudeza que el Grupo de Memoria Histórica reveló que en una confesión hecha ante la Fiscalía por parte de Francisco Enrique Villalba Hernández (alias Cristian Barreto) afirmó haber recibido entrenamiento en tortura y describió su experiencia así:

Ellos escogían a los alumnos para que participaran. Una vez, uno de los alumnos se negó. Se paró “Doble Cero” y le dijo: “Venga, que yo sí soy capaz”. Luego lo mandó descuartizar a él. A mí me hicieron quitarle el brazo a una muchacha. Ya le habían quitado la cabeza y una pierna. Ella pedía que no lo hicieran, que tenía dos hijos.

A las personas se les habría desde el pecho hasta la barriga para sacar lo que es tripa, el despojo. Se les quitaban piernas, brazos y cabeza. Se hacía con machete o con cuchillo. El resto, el despojo, con la mano. Nosotros, que estábamos en instrucción, sacábamos los intestinos.¹³⁵

Por otra parte Quevedo-Hidalgo en una investigación denominada Escuela de la Muerte, narra la historia de unos actos de tortura realizados en “un corregimiento, un pequeño caserío de una región selvática de Colombia, caracterizada por sus altas temperaturas y por estar alejada de centros urbanos y de una presencia estatal permanente”¹³⁶; y describe los hechos vividos en esa escuela:

Las torturas físicas y psicológicas eran interminables. Las víctimas suspendidas en el árbol presenciaban su futuro inmediato: sobre el planchón de cemento con el cuerpo y el alma expuestos al horror, eran descuartizadas, aún con vida, otras víctimas; quienes habían estado en el árbol y en el pequeño y oscuro cuarto, donde sus cuerpos malheridos se descomponían y permanecían tardes o días atados, hacinados y sangrantes. Otras víctimas eran llevadas a zonas boscosas o de cultivo del corregimiento, quienes eran obligadas a cavar sus futuras tumbas. Según las órdenes del «instructor» y dependiendo de las prácticas, podrían ser ejecutados ahí mismo, luego descuartizadas y enterradas por otros aprendices.¹³⁷

¹³⁴ GRUPO DE MEMORIA HISTORICA. ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Informe General. Bogotá D.C. 2013. Pág. 57.

¹³⁵ GRUPO DE MEMORIA HISTORICA. ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Informe General. Bogotá D.C. 2013. Pág. 57.

¹³⁶ QUEVEDO-HIDALGO, Helka. Escuela de la muerte. Una mirada desde la antropología forense. En: Universitas humanística No.66 (julio-diciembre de 2008); pág. 7.

¹³⁷ QUEVEDO-HIDALGO, Helka. Escuela de la muerte. Una mirada desde la antropología forense. En: Universitas humanística No.66 (julio-diciembre de 2008); pág. 8.

4.3. Familiares de personas Desaparecidas: Víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Según la Red Nacional de Información¹³⁸ de la Unidad para la atención y Reparación Integral a las Víctimas a corte de 1 de Febrero de 2015 registró 153.400 hechos de Desaparición Forzada, entre los cuales 44.840 son víctimas directas y 108.560 son víctimas indirectas; ahora, estos son el número de personas que se han acercado a denunciar estos hechos y en la mayoría de casos han ocurrido recientemente.

Expresan Martin y Rodríguez-Pinzón que “en varios casos, la Corte ha descrito el sufrimiento y la angustia ocasionados a los familiares de las víctimas como tratos crueles, inhumanos o degradantes”¹³⁹; además que indican que La Corte ha estimado que: “las siguientes son causas de sufrimiento y angustia intensos entre los familiares de las víctimas: la falta de información acerca del paradero de éstas, la obstrucción de la labor de la justicia y la falta de una investigación adecuada y de sanciones a los responsables”¹⁴⁰. También la Corte Interamericana ha dictaminado:

en reiteradas ocasiones que los familiares de las víctimas de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales experimentan una violación de su derecho a no ser sometidos a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes como consecuencia directa de los malos tratos sufridos por sus seres queridos.¹⁴¹

4.4. HACINAMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EN COLOMBIA.

En Colombia desde la década de los años 90 se ha vivido en el país una crisis carcelaria y penitenciaria constante por la superpoblación de personas detenidas en los centros de reclusión. La causa más próxima ha sido los altos índices de criminalidad en diferentes áreas como los son la delincuencia común, el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el mismo conflicto armado interno; por lo que el INPEC expresa que “se da el quebrantamiento del principio de libertad para el individuo en el marco del sistema jurídico del país, el principal impacto lo recibe el sistema penitenciario”¹⁴².

¹³⁸ RED NACIONAL DE INFORMACIÓN. Unidad para la atención y Reparación Integral a las Víctimas a corte de 1 de Febrero de 2015.

¹³⁹ MARTIN, Claudia y Rodríguez-Pinzón, Diego. La Prohibición de la Tortura y los Malos Tratos en el Sistema Interamericano. Ginebra. 2006. (ISBN 2-88477-119-0). Pág. 116.

¹⁴⁰ MARTIN, Claudia y Rodríguez-Pinzón, Diego. La Prohibición de la Tortura y los Malos Tratos en el Sistema Interamericano. Ginebra. 2006. (ISBN 2-88477-119-0). Pág. 116.

¹⁴¹ MARTIN, Claudia y Rodríguez-Pinzón, Diego. La Prohibición de la Tortura y los Malos Tratos en el Sistema Interamericano. Ginebra. 2006. (ISBN 2-88477-119-0). Pág. 115.

¹⁴² INSTITUTO NACIONAL CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE COLOMBIA. Informe: De entre muros para la libertad. 2011. Pág. 11.

El hacinamiento como tal genera la vulneración de los Derechos Humanos de los internos debido a las precarias condiciones físicas de las instalaciones, problemas de salubridad y de salud, falta de espacios para la recreación, trabajo y educación, entre otros; Afirma la Procuraduría General de la Nación que: “en casos críticos, el hacinamiento lleva a que los presos sean tratados como objetos o productos; el cúmulo de presos es tratado en masa y la administración de la prisión se limita a contarlos, alimentarlos, encerrarlos y contenerlos”¹⁴³.

En lo que concierne a la tortura y tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, la crisis carcelaria es un espacio idóneo para que de diversas formas se presenten este tipos de actos en contra de los internos, no solo que los funcionarios y guardias de los centros penitenciarios torturen a los internos, sino también que las condiciones del centro pueden considerarse como un trato o pena cruel, inhumana y degradante. En este capítulo se espera demostrar como la situación penitenciaria del país es un espacio propicio para que se presenten este tipo de actos.

4.4.1. La Crisis Carcelaria Y Penitenciaria En Colombia.

Para el Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario de Colombia (INPEC): “La situación penitenciaria y carcelaria en Colombia se ha caracterizado a través de los años por una deficiente infraestructura física que limita, al infractor de la ley penal, las condiciones de habitabilidad, seguridad y de atención social desde cualquier ángulo humano que se le mire”¹⁴⁴.

Bajo el Marco del convenio de cooperación firmando entre la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, se realizó un informe denominado “Situación de los Derechos Humanos de los reclusos en los establecimientos de reclusión de Colombia”, la investigación concluyó que:

Trae como consecuencia graves problemas de salud, de violencia, de indisciplina, de carencia en la prestación de servicios (trabajo, educación, asistencia social, deportes, educación, visita conyugal, servicios médicos, etc.), con una clara violación de la integridad física y mental de los reclusos, de su autoestima y de la dignidad humana. Igualmente, el hacinamiento, cuando sobrepasa el nivel crítico, se convierte en una forma de pena cruel, inhumana y degradante. Para la comisión es claro que en los penales que presentan condiciones de hacinamiento crítico, la calidad de vida de los reclusos sufre serios deterioros, al punto que no se pueden considerar sitios seguros ni para los internos, ni para el personal que trabaja con ellos.

¹⁴³ PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. El sistema de prisiones colombiano opera bajo niveles de presión crecientes; los derechos humanos de las personas privadas de libertad en riesgo. 2012. Pág. 2.

¹⁴⁴ INSTITUTO NACIONAL CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE COLOMBIA. Informe: De entre muros para la libertad. 2011. Pág. 9.

“En síntesis, a mayor hacinamiento, la calidad de vida de los reclusos y la garantía de sus Derechos Humanos y fundamentales es menor”.¹⁴⁵ Agrega la Defensoría del Pueblo en su informe que el Hacinamiento se venía presentando desde los años 90 y en cifras indicó:

A finales de 1990, la capacidad de los 178 centros carcelarios existentes en esa época era de 28.380 cupos, y la población reclusa era de 32.387 personas, existiendo un déficit de 4.007 cupos, o sea un hacinamiento del 14%.

El notorio incremento presentado en el año de 1996 se debió a los efectos de la Ley 228 de 1995, conocida como “Estatuto de Seguridad Ciudadana”, que estableció penas privativas de la libertad para infracciones menores contribuyendo a que se agudizara el hacinamiento ya existente.¹⁴⁶

Para el 28 de abril de 1998, la crisis estalló de manera alarmante ya que realmente la situación era muy delicada y preocupante; a tal punto la Corte Constitucional señaló:

la “existencia de un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario”, en la medida en que las autoridades responsables desconocen abiertamente la normatividad (también la jurisprudencia) nacional e internacional que alude a los derechos de las personas privadas de la libertad⁶⁶ y en tanto las “cárceles colombianas se han convertido en un problema de orden público y en centros donde se violan sistemáticamente los derechos fundamentales de los internos”.¹⁴⁷

Señala el INPEC¹⁴⁸ que la población Carcelaria pasó en 1993 de 29.114 a 113.890 en el 2012. Manifiesta la Procuraduría General de la Nación que:

Los niveles de hacinamiento existentes en las prisiones del país ponen en entredicho la aplicación de la ley de ejecución penal, generan situaciones de violaciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y someten a los funcionarios del sistema penitenciario a trabajar bajo condiciones de altísimo riesgo.¹⁴⁹

¹⁴⁵ Defensoría del Pueblo. Informe: Situación de los Derechos Humanos de los reclusos en los establecimientos de reclusión de Colombia. 2011. Pág. 1.

¹⁴⁶ Defensoría del Pueblo. Informe: Situación de los Derechos Humanos de los reclusos en los establecimientos de reclusión de Colombia. 2011. Pág. 2.

¹⁴⁷ CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. sentencia T-153 de 1998, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. Como se citó en: ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA. Violencia Estatal En Colombia: Un Informe Alternativo Presentado Al Comité Contra Tortura De Las Naciones Unidas. Ginebra. 2004.

¹⁴⁸ INSTITUTO NACIONAL CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE COLOMBIA. Informe: Doce Pasos para hacer Frente a la Crisis del Sistema Carcelario y Penitenciario. 2013. Pág. 9.

¹⁴⁹ PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. El sistema de prisiones colombiano opera bajo niveles de presión crecientes; los derechos humanos de las personas privadas de libertad en riesgo. 2012. Pág. 1.

La Procuraduría acudiendo al estudio realizado a los parámetros internacionales frente a los centros carcelarios y penitenciarios estableció que:

cualquier sistema de reclusión o prisión que trabaje bajo condiciones de hacinamiento superiores a 20 por ciento (es decir, 120 personas reclusas por 100 plazas disponibles) se encuentra en estado de “sobrepoblación crítica”. Una situación de “sobrepoblación crítica” puede generar violaciones o desconocimiento de los derechos fundamentales de los internos. En el país, 68 centros de reclusión revelan una cifra de hacinamiento mayor al índice de sobrepoblación crítica. Un total de 41.819 personas experimentan condiciones de vida inaceptables bajo el parámetro internacional, esto es, el 62 por ciento del total de la población reclusa.¹⁵⁰

Considera el IINPEC que de acuerdo a la tendencia de crecimiento de la población intramuros y las estadísticas que maneja el mismo instituto pronostica que:

A diciembre de 2014, si las condiciones de Política Criminal, Penitenciaria y Social se mantienen, se contará con 120 000 internos y una sobrepoblación cercana a las 43 000 mil personas. Se planea, entonces tanto, la construcción de nuevos establecimientos de reclusión para el presente cuatrienio con una oferta de 26 000 nuevos cupos, como otras medidas que aliviarán o al menos mantendrán en niveles moderados el actual índice de hacinamiento con toda la afectación que ello produce.¹⁵¹

4.4.2. Los Actos De Tortura En Centros Carcelarios Y Penitenciarios.

Colombia respetuoso de los tratados y convenios internacionales para la protección de los Derechos Humanos, en especial los lineamientos establecidos por la Convención contra la Tortura, en el Sistema Penitenciario y Carcelario colombiano “están prohibidos todo tipo de castigos que conlleven un trato cruel, inhumano o degradante individual o colectivo, y en caso de que se den, generan de acuerdo con nuestra legislación responsabilidades disciplinarias sin perjuicio de las acciones penales en contra de los responsables de estas conductas punibles”¹⁵².

Lo triste es que la realidad de la crisis carcelaria pone en entre dicho el ánimo de respetar esos estándares internacionales y aunque en nuestro país existen diversos mecanismos de control, La Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) afirma que: “la actual crisis carcelaria, caracterizada por altos

¹⁵⁰ PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. El sistema de prisiones colombiano opera bajo niveles de presión crecientes; los derechos humanos de las personas privadas de libertad en riesgo. 2012. Pág. 3.

¹⁵¹ INSTITUTO NACIONAL CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE COLOMBIA. Informe: De entre muros para la libertad. 2011. Pág. 10.

¹⁵² MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, REPÚBLICA DE COLOMBIA. IV Informe Periódico De Colombia Al Comité Contra La Tortura Sobre Los Progresos En La Aplicación De La Convención Contra La Tortura Y Otros Tratos O Penas Cruelles, Inhumanos O Degradantes. Bogotá D.C. 2012. Pág. 44.

niveles de hacinamiento y la persistencia de condiciones de detención inhumanas, muestra la ineficacia de estos mecanismos”¹⁵³.

En un Informe realizado por Oficina de Planeación del INPEC, en el que describió de manera amplia el total población reclusa discriminada por sexo, situación jurídica, por departamentos y regionales; y en el que se estableció:

El 31 de julio de 2002, en los establecimientos de reclusión administrados por el Inpec⁶⁸ se encontraban reclusas 51.074 personas privadas de la libertad, de las cuales 47.654 (93,30%) eran hombres y 3.420 (6,70%) eran mujeres; 20.348 (39,84%) estaban internas en calidad de sindicadas y 30.726 (60,16%) en primera o en segunda instancia, en etapa de juzgamiento. Los cupos carcelarios efectivamente en funcionamiento para esa fecha eran 44.326, de tal manera que un sobrecupo de 6.748 personas generaba una tasa de hacinamiento nacional promedio equivalente al 15,22%⁶⁹.

El 30 de junio de 2003, en los 146 establecimientos de reclusión administrados por el INPEC se encontraban reclusas 59.011 personas privadas de la libertad, de las cuales 54.291 (92,05%) eran hombres y 4.140 (7,02%) eran mujeres; 25.515 (43,24%) estaban internas en calidad de sindicadas y 33.496 (56,02%) en primera o en segunda instancia, en etapa de juzgamiento. Los cupos carcelarios efectivamente en funcionamiento para esa fecha eran 44.936, de tal manera que un sobrecupo de 14.075 personas generaba una tasa de hacinamiento nacional promedio equivalente al 31,32%⁷⁰.¹⁵⁴

El INPEC en un informe estadístico de febrero de 2015 actualizó las cifras de las personas que se encuentran reclusas en los diferentes centros carcelarios y penitenciarios del país; las cifras que arrojó son:

La población carcelaria y penitenciaria a cargo del INPEC, supera la capacidad de los ERON debido al constante crecimiento en el número de reclusos, al finalizar el mes de enero, el Instituto presentó una sobrepoblación de 38.886 personas, que corresponde a una oferta de 77.874 cupos y una demanda de 116.760 internos que los requirieron.

Al iniciar el año 2015 la población carcelaria y penitenciaria estaba conformada por 108.640 (93,0%) hombres y 8.120 (7,0%) mujeres.

En cuanto a la situación jurídica de la población carcelaria y penitenciaria en enero de 2015, 41.133 (35,2%) internos se encontraban en calidad de sindicados, de ellos, 37.994 (92,4%) hombres y 3.139 (7,6%) mujeres. La población en situación de

¹⁵³ ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA (APT). Consideración de los informes del Examen Periódico Universal (EPU), Colombia. En: Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (24° periodo de sesiones, 9-27 de septiembre 2013). Intervención Oral. 2013. Pág. 1.

¹⁵⁴ OFICINA DE PLANEACIÓN DEL INPEC. Informe Cuadro: Total población reclusa discriminada por sexo, situación jurídica, por departamentos y regionales, Bogotá. 2003. Como se citó en: ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA. Violencia Estatal En Colombia: Un Informe Alternativo Presentado Al Comité Contra Tortura De Las Naciones Unidas. Ginebra. 2004. Pág. 41-42.

condenada registró un total de 75.627 (64,8%) internos, de los cuales 70.646 (93,4%) corresponde a hombres y el (6,6%) o sea 4.981 son mujeres.¹⁵⁵

Frente a la crisis sistema Penitenciario y Carcelario, asegura la Coalición Colombiana Contra la Tortura que: “desconociendo la resocialización como principal función de la pena, ha privilegiado la seguridad representada en muros, imponiendo medidas en detrimento de la dignidad y los derechos de las personas privadas de la libertad”¹⁵⁶. La Organización Mundial Contra La Tortura frente a la infraestructura carcelaria a cargo del INPEC: “es vetusta, inadecuada y se encuentra seriamente deteriorada. La calidad de los cupos carcelarios es muy baja. Las condiciones materiales imperantes en cárceles y penitenciarías implican algún grado de castigo corporal y representan una pena adicional”¹⁵⁷.

Coalición Colombiana Contra La Tortura en el estudio realizado específicamente en las cárceles del país, encontró que:

- Persistencia de las precarias condiciones materiales de los centros de detención.
- Malos tratos en cárceles y sus consecuencias en la salud mental de la población carcelaria.
- Precariedad de las condiciones para el estudio, trabajo y enseñanza.
- Falta de garantías para mantener separada la población reclusa de los distintos grupos armados que participan en las hostilidades.
- Tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes en centros carcelarios.
- Persistencia de la impunidad en el delito de tortura en los centros carcelarios.
- Debilitamiento del sistema de control.¹⁵⁸

Pese a que no existen datos estadísticos claros y organizados, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes constituyen una práctica corriente en los establecimientos de reclusión del país. Las Naciones Unidas en el 2000 mediante la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó una advertencia, indicando que: “personas detenidas o condenadas que se hallan en penitenciarías y cárceles no sólo deben afrontar el hacinamiento y las más deplorables condiciones sanitarias, sino repetidos abusos y actos de fuerza innecesaria por parte de los servidores públicos a cargo de su custodia”¹⁵⁹.

¹⁵⁵ INSTITUTO NACIONAL CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE COLOMBIA. Informe estadístico Febrero de 2015. 2015. Pág.17-24.

¹⁵⁶ COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bogotá. 2009. Pág. 39.

¹⁵⁷ ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA. Violencia Estatal En Colombia: Un Informe Alternativo Presentado Al Comité Contra Tortura De Las Naciones Unidas. Ginebra. 2004. Pág. 43.

¹⁵⁸ COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe de Seguimiento a las recomendaciones del comité contra la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas, Colombia 2009-2010. Bogotá D.C. 2011. Pág. 54-62.

¹⁵⁹ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia, 9 de marzo de 2000, documento E/CN.4/2000/11. Como se citó en: ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA. Violencia Estatal En

La Coalición Colombiana Contra la Tortura conoció que la Procuraduría ha registrado “198 casos en contra de funcionarios del INPEC entre enero de 2007 y abril de 2008, entre otros, por diferentes categorías de trato inhumano, cruel y degradante”¹⁶⁰. La Coalición también encontró que la oficina de control interno disciplinario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ha documentado que:

entre enero de 2007 y junio de 2008, 79 faltas disciplinarias de maltrato físico y/o verbal en contra de las y los internos. Entre ellas se destacan fracturas, golpes, aplicación del escorpión (esposado de manos y pies), amenazas de muerte, obligación a desnudarse, no acceso a atención médica, acoso sexual, y agresión verbal. Solamente en dos de estos casos se ha abierto una investigación disciplinaria. Por su parte, la Procuraduría ha registrado 198 casos en contra de funcionarios del INPEC entre enero de 2007 y abril de 2008, entre otros por diferentes categorías de trato inhumano, cruel y degradante.¹⁶¹

El Comité de Solidaridad preocupado por las múltiples denuncias de torturas que realizaron internos de las distintas cárceles del país realizó una investigación al respecto y visitó a su vez dichas cárceles, teniendo un contacto directo con los internos y encontró los siguientes resultados:

una encuesta entre abril y junio de 2008¹⁶², a la que el 54% (125/230) de los internos respondió sí a la pregunta de si habían sido torturados alguna vez. Es notable que el 46% (106/230) de la población no diera respuesta a la pregunta, tal vez por el posible temor a represalias.

El 86% (198/230) de las personas encuestadas respondió sí a la pregunta de si habían sido víctimas de tortura psicológica en alguna oportunidad dentro de la cárcel. Las modalidades de tortura psicológica usadas en los centros penitenciarios consisten en: aislamiento, amenazas, presión sobre familiares y ejecuciones simuladas. En muchos casos, estas formas de tortura son combinadas en contra de una misma persona. Los responsables de estos actos de tortura son en su mayoría las guardias y funcionarios del INPEC, aunque también hay casos en donde el ejército y policía han perpetrado las violaciones.

Además de infligir agresiones en contra del individuo, el personal del INPEC también castiga de forma colectiva a los internos. El 48% (111/230) de los internos manifestó haber sido sometido a castigos colectivos, que corresponden con restricciones al suministro de agua, electricidad, y comida; limitaciones al uso de teléfono; acceso delimitado a las celdas; abuso de autoridad en las requisas; sometimiento a horas de ejercicio físico; y maltratos en contra de las personas visitantes.¹⁶²

Colombia: Un Informe Alternativo Presentado Al Comité Contra Tortura De Las Naciones Unidas. Ginebra. 2004. Pág. 44-45.

¹⁶⁰ COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bogotá. 2009. Pág. 32.

¹⁶¹ COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe Alternativo Al 4° Informe Periódico Del Estado Colombiano Al Comité Contra La Tortura: Resumen Ejecutivo. Bogotá D.C. 2009. Pág. 3.

¹⁶² COMITÉ DE SOLIDARIDAD. Encuesta. 2012. Como se citó en: Coalición Colombiana Contra la Tortura. Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bogotá. 2009. Pág. 32.

La Organización Mundial contra la Tortura asegura, frente a la situación de violencia en los establecimientos de reclusión, que: “es propicia para que sucedan actos de tortura. El hallazgo de cuerpos humanos descuartizados y la ocurrencia de torturas masivas en cárceles y penitenciarías constituyen indicios preocupantes sobre la posibilidad de que la tortura sea empleada sistemáticamente por parte del personal de custodia y vigilancia del INPEC”¹⁶³. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, luego de unas visitas en diferentes cárceles concluyó:

En todos los centros penitenciarios, carcelarios y de policía visitados, excepto uno [la reclusión de mujeres Buen Pastor de Medellín (Antioquia)], la delegación recibió denuncias y/o testimonios de golpizas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluso de casos de torturas infligidas por el personal de guardia o por reclusos ‘de confianza’. Varios de los denunciantes fueron examinados por la delegación y se comprobaron lesiones compatibles con las denuncias y testimonios recabados.¹⁶⁴

En el caso de las niñas, niños y adolescentes llegan a las instituciones de reeducación “tienen que vivir hacinados y son sometidos a tratos crueles y degradantes”¹⁶⁵, estableció la Organización mundial Contra la Tortura. Por su parte la Defensoría del Pueblo en una inspección realizada en el año 2000 encontró que:

en algunas instituciones las niñas y niños son maltratados. En la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), por ejemplo, encontró que las niñas y niños eran golpeados con una tabla. En la ciudad de Palmira (Valle del Cauca), una de las modalidades de castigo a las niñas y niños, que se denomina “voltear”, consiste en ponerlos a dar vueltas hasta que se vomiten, frente a sus compañeros.¹⁶⁶

¹⁶³ ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA. Violencia Estatal En Colombia: Un Informe Alternativo Presentado Al Comité Contra Tortura De Las Naciones Unidas. Ginebra. 2004. Pág. 45.

¹⁶⁴ OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Informe Centros de reclusión en Colombia: un estado de cosas inconstitucional y de flagrante violación de derechos humanos. Informe de la misión internacional: derechos humanos y situación carcelaria, 31 de octubre de 2001. Como se citó en: ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA. Violencia Estatal En Colombia: Un Informe Alternativo Presentado Al Comité Contra Tortura De Las Naciones Unidas. Ginebra. 2004. Pág. 45.

¹⁶⁵ ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA. Violencia Estatal En Colombia: Un Informe Alternativo Presentado Al Comité Contra Tortura De Las Naciones Unidas. Ginebra. 2004. Pág. 56.

¹⁶⁶ DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe: La Niñez y sus Derechos, Boletín n.º6. Bogotá. 2000. Como se citó en: ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA. Violencia Estatal En Colombia: Un Informe Alternativo Presentado Al Comité Contra Tortura De Las Naciones Unidas. Ginebra. 2004. Pág. 56.

4.4.3. Observaciones De Organizaciones Acerca De La Tortura En Centro Carcelario.

El Comité contra la Tortura en reiteradas ocasiones ha venido mostrando su preocupación por el tema de “las condiciones de detención, puesto que existe hacinamiento y siguen recibéndose quejas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en los centros penitenciarios y en centros de detención temporal”¹⁶⁷. El comité de Solidaridad considera que “no se opone a las medidas de seguridad que adopten las autoridades carcelarias en ejercicio de sus facultades legales y constitucionales; sin embargo, considera que todas sus actuaciones deben guardar absoluto respeto por los derechos humanos y demás garantías de las personas privadas de la libertad”¹⁶⁸.

Coalición Colombiana Contra la Tortura señala además dos temas muy importantes que se han presentado en Colombia y requieren toda la atención de la comunidad internacional, y los describe como:

a. Restricciones a la comunicación

Las dificultades más comunes las podemos resumir en: a) Limitaciones y obstáculos al ingreso de prensa alternativa y material de estudio; b) por “motivos de seguridad”, no se permite el acceso de radios ni televisores en las celdas, en algunos pabellones de los nuevos establecimientos de Alta y Mediana Seguridad, c) deficiente servicio de telecomunicaciones al interior de los penales; y alto costo de la comunicación telefónica.

b. Debilitamiento del sistema interno de vigilancia y control sobre derechos humanos en los centros carcelarios

El INPEC decretó a mediados del año 2007, el cierre de las mesas de trabajo donde las y los guardianes y las y los reclusos trabajaban juntos para dar soluciones a problemas que se presentaban en la cárcel, bajo el argumento que los presos y presas contaban con Comités de derechos humanos. El cierre de las mesas de trabajo ha afectado de manera directa el derecho a participar de manera activa en las decisiones que les afectan y a realizar propuestas colectivas para el mejoramiento de sus condiciones de reclusión.¹⁶⁹

¹⁶⁷ ÚBEDA-PORTUGUÉS, José Escribano. Análisis del Informe del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas de 2009 sobre Colombia. En: Reflexión Política, vol. 12., núm. 23 (junio 2010); pág. 7-8..

¹⁶⁸ COMITÉ DE SOLIDARIDAD. Encuesta. 2012. Como se citó en: Coalición Colombiana Contra la Tortura. Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bogotá. 2009. Pág. 34-35.

¹⁶⁹ COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bogotá. 2009. Pág. 40-42.

La Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) señala que es evidente que existe la necesidad de que Colombia establezca un sistema independiente de monitoreo de lugares de detención¹⁷⁰. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal estableció que en Colombia hay prácticas que vulneran el derecho a la participación de las personas detenidas y concluyó: “con base a las graves condiciones de detención en Colombia, varios países le recomendaron al Estado colombiano ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura”¹⁷¹.

El comité de Solidaridad¹⁷² indica que persiste la impunidad en el delito de tortura, por lo que se agrava las condiciones y contribuye a perpetuar la práctica de la tortura y los malos tratos en contra de la población carcelaria y señala como elementos que caracterizan dicha situación, como: a) falta de preparación en la materia por parte de los servidores públicos encargados de la investigación, b) inadecuada o inexistente recopilación de las pruebas que evidencian actos de tortura, c) autoridades no competentes en las investigaciones de tortura, d) dilación de las investigaciones, y e) falta de imparcialidad de los funcionarios que investigan el delito de tortura.

Las torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes son prácticas usuales durante el desarrollo de operaciones policivas de represión del delito común y en el curso de operaciones militares¹⁷³. Aunque no se cuente con información estadística acerca de actos de torturas durante la captura, se ha concluido por parte de la Coalición contra la Tortura que: “Muchas de las víctimas de tortura no denuncian lo sucedido durante la indagatoria. Algunas personas lo hacen, pero la Fiscalía no presta atención a las denuncias”¹⁷⁴.

Amnistía Internacional reitera que “los presos deberían ser informados sin dilación de sus derechos, incluyendo el derecho de presentar quejas relativas al trato que reciben”¹⁷⁵. Agrega Amnistía¹⁷⁶ que comúnmente se presenta la

¹⁷⁰ ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA (APT). Consideración de los informes del Examen Periódico Universal (EPU), Colombia. En: Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (24° periodo de sesiones, 9-27 de septiembre 2013). Intervención Oral. 2013. Pág. 2.

¹⁷¹ GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL. Informe Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas presentadas por el Estado examinado, A/HRC/10/82/Add.1. como se citó en: COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe Alternativo Al 4° Informe Periódico Del Estado Colombiano Al Comité Contra La Tortura: Resumen Ejecutivo. Bogotá D.C. 2009. Pág. 4.

¹⁷² COMITÉ DE SOLIDARIDAD. Encuesta. 2012. Como se citó en: Coalición Colombiana Contra la Tortura. Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bogotá. 2009. Pág. 46-48.

¹⁷³ Coalición Colombiana Contra la Tortura. Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bogotá. 2009. Pág. 34.

¹⁷⁴ Coalición Colombiana Contra la Tortura. Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bogotá. 2009. Pág. 38.

¹⁷⁵ AMNISTIA INTERNACIONAL. La Tortura. Los Derechos Humanos, carpeta didáctica. 2014. Pág. 15.

tortura cuando la víctima está detenida pero en un régimen de incomunicación, sin posibilidad de contactarse con aquellas personas que podrían ayudarlas o informar de lo que les está sucediendo.

Es mejor que se permita a los familiares, abogados y médicos un acceso rápido y frecuente, según Amnistía¹⁷⁷. El Relator Especial sobre la cuestión de la tortura en cuanto a los regímenes de incomunicación utilizados con el capturado, y aun con las personas que se les ha puesto una pena de prisión, ha manifestado que:

crea condiciones que facilitan la perpetración de la tortura y puede en sí constituir una forma de trato cruel, inhumano o degradante o incluso de tortura por lo que reclama que el régimen de incomunicación debería ser abolido.¹⁷⁸

Para establecer unos parámetros en el tratamiento a las personas que han cometido conductas punibles, se aprobó un tratado en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente el 30 de agosto de 1955 y aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas el 31 de julio de 1957, en los que se estableció:

31. Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias.

32. 1) Las penas de aislamiento y de reducción de alimentos sólo se aplicarán cuando el médico, después de haber examinado al recluso, haya certificado por escrito que éste puede soportarlas. 2) Esto mismo será aplicable a cualquier otra sanción que pueda perjudicar la salud física o mental del recluso. En todo caso, tales medidas no deberán nunca ser contrarias al principio formulado en la regla 31, ni apartarse del mismo. 3) El médico visitará todos los días a los reclusos que estén cumpliendo tales sanciones disciplinarias e informará al director si considera necesario poner término o modificar la sanción por razones de salud física o mental.

33. Los medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza nunca deberán aplicarse como sanciones. Tampoco deberán emplearse cadenas y grillos como medios de coerción.¹⁷⁹

¹⁷⁶ AMNISTIA INTERNACIONAL. La Tortura. Los Derechos Humanos, carpeta didáctica. 2014. pág. 15.

¹⁷⁷ AMNISTIA INTERNACIONAL. La Tortura. Los Derechos Humanos, carpeta didáctica. 2014. pág. 15..

¹⁷⁸ RELATOR ESPECIAL SOBRE LA CUESTIÓN DE LA TORTURA. Informe sobre la cuestión de la tortura en el año 2004 E/CN.4/2004/56/Add.2 de 6 de febrero de 2004. España. Como se citó en: Asociación Española de Neuropsiquiatría/ Profesionales de Salud Mental (AEN); Asociación para el Estudio de Problemáticas Sociales (Ekimen Elkartea); Grupo de Acción Comunitaria (GAC); Centro de Recursos en Salud Mental y Derechos Humanos Jaiki-Hadi; Prebentzio eta Asistentziarako Elkartea; Osasun Mentalaren Elkartea Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria (OME); Asociación por el Derecho a la Salud (OSALDE) y Dpto. de Psicología Social, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Incomunicación y tortura: Análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul. 2014. Pág. 26.

¹⁷⁹ AMNISTIA INTERNACIONAL. La Tortura. Los Derechos Humanos, carpeta didáctica. 2014. Pág. 31.

CONCLUSIONES.

Luego de entender como el corpus iuris del Derecho Internacional ha establecido unos parámetros claros para erradicar todo acto de Tortura y Trato o Pena Cruel, Inhumana o Degradante; además que el Estado Colombiano comprometido a cumplir estas disposiciones internacionales en su normatividad interna ha realizado las reformas y ajustes pertinentes; puede al fin arrojar unas conclusiones a partir de los resultados que se encontraron y examinaron durante la investigación, que son:

- En los diferentes episodios de violencia en la historia de la humanidad, siempre estuvo como ingrediente principal los actos de Tortura y Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes, representando una vergüenza para la sociedad.
- La comunidad internacional preocupada por erradicar los actos de Tortura y Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes ha trabajado arduamente en la construcción de un completo corpus iuris para la prevención y protección de todas las personas, además de garantizar el acceso a mecanismos internacionales para exigir la prevención de estos actos y la protección de sus derechos.
- Se ha dejado claro en cada tratado, convención, y declaración que queda absolutamente prohibido todo acto de Tortura y Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes.
- En la actualidad se considera que se siguen presentando actos de Tortura y Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes; los Estados son los principales victimarios y han cumplido con sus obligaciones internacionales como lo demuestran los resultados de las diferentes investigaciones frente al tema.
- La diferencia entre los actos de Tortura y Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes está en el nivel de intensidad de la acción; sobre todo el derecho internacional mediante la normatividad y la jurisprudencia ha dejado claro esta diferencia, aunque asegura que cada caso merece su estudio particular.
- En Colombia se sigue presentando actos de Tortura y Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes y las cifras son alarmantes; y aún más preocupante es la impunidad frente a estos casos.
- El Estado Colombiano es el victimario que causa más actos de Tortura y Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes en el país.

- En Colombia el Conflicto armado Interno y la Crisis carcelaria y penitenciaria son espacios perfectos para que se presenten actos de Tortura y Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes por tener condiciones idóneas para ello.
- La tortura ha sido parte del conflicto armado interno como una herramienta perfecta para los actores armados en busca de sus fines. La historia muestra como los casos de tortura han sido tan sangrientos y crueles como en cualquier episodio atroz de la historia mundial.
- La tortura en Colombia se ha visto opacada al ser superada en número por los homicidios, masacres, desapariciones forzadas, entre otras; dándole a la tortura un papel secundario. Tal vez por lo fácil que resulta ello para las autoridades competentes, quienes prefieren imputar un delito de mayor significancia como la muerte, o de menor dificultad probatoria como lo es las lesiones personales; así no tener la necesidad de probar en el proceso penal la intencionalidad de torturar.
- Los familiares de las víctimas de desaparición forzada son considerados por el Derecho Internacional como víctimas de tortura; en Colombia se registran más de 150.000 mil casos de desaparición forzada.
- Las cifras de hacinamiento del país son realmente alarmantes y sobrepasan los estándares internacionales de medida frente al fenómeno. Representa un espacio de peligro para los internos, los funcionarios que trabajan en las cárceles y aun a toda la sociedad.
- En Colombia si se presentan casos en los cuales los guardias o funcionarios de los centros de reclusión torturan en diversas modalidades a los internos.
- El simple hecho de las pésimas condiciones físicas de los establecimientos carcelarios representa para los internos recibir un trato o pena cruel Inhumana o Degradante; debido a la falta de atención médica, espacios de estudio, recreación y trabajo, malas condiciones para dormir, ir al baño y espacios de recreación y deporte.
- Hay un alto grado de impunidad en el país frente al número de denuncias, investigaciones, y procesos que se adelantan; las condenas por estos casos son mínimas.
- En los momentos de captura y retención policial se puede presentar actos de tortura, en especial cuando hay incomunicación del capturado, no se le informa sus derechos y no se sigue el procedimiento establecido en la ley.

La Conclusión final que se puede hacer frente a esta problemática es que Colombia no ha cumplido con los estándares internacionales acerca de la prohibición de todos los actos de Tortura y Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes, lo anterior como vimos debido a una falta de política seria y la existencia de dos espacios perfectos para la realización de estos actos como lo son el Conflicto Armado Interno y el Hacinamiento Carcelario y Penitenciario.

RECOMENDACIONES.

Frente los resultados que se encontraron en este trabajo es importante que este tipo de productos académicos no se quede sólo en la realización de un diagnóstico o una crítica a partir de un método científico; sino que con el conocimiento profundo del tema y el ánimo de aportar a la sociedad se realicen una serie de recomendaciones para erradicar todo acto de Tortura y Trato o Pena Cruel, Inhumana o Degradante.

- La comunidad internacional debe diseñar mecanismos más efectivos que permitan exigir a los Estados el cumplimiento de las normatividades y jurisprudencia frente a la Tortura y tratos o penas crueles.
- Deben crearse sanciones más estrictas a los Estados que no cumplen con los parámetros internacionales frente a los actos de Tortura y Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes.
- Colombia debe ratificar el Protocolo facultativo de la Convención Contra la Tortura para ser coherente con la política de respeto de los Derechos Humanos, además que se necesita un sistema de información más efectivo y herramientas para realizar mejores diagnósticos frente a la tortura en el país.
- Colombia debe lograr el fin del Conflicto Armado Interno y superar la Crisis del Sistema Carcelario y Penitenciario para que no existan espacios propicios para los actos de tortura.
- Colombia debe eliminar toda impunidad ante los delitos de tortura en el país, por lo que debe presionar a las autoridades judiciales y de investigación para que realicen con mayor efectividad su trabajo, que el Estado además garantice la capacitación, la dotación de elementos necesarios para la investigación y el personal capacitado para realizar la labor.
- Realizar las reformas normativas e institucionales necesarias para que no se presenten más estos actos de Tortura y Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes.

BIBLIOGRAFIA.

ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Doc. A/HRC/16/22. 2011.

AMNISTIA INTERNACIONAL. Historia de la Tortura. Catalunya. 2014.

AMNISTÍA INTERNACIONAL. Informe La Tortura 2014: 30 Años de Promesas Incumplidas. 2014.

AMNISTÍA INTERNACIONAL. La Tortura, Derechos Humanos Carpeta Didáctica. Barcelona. 2010.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUROPSIQUIATRÍA/ Profesionales de Salud Mental (AEN); Asociación para el Estudio de Problemáticas Sociales (Ekimen Elkartea); Grupo de Acción Comunitaria (GAC); Centro de Recursos en Salud Mental y Derechos Humanos Jaiki-Hadi; Prebentzio eta Asistentziarako Elkartea; Osasun Mentalaren Elkartea Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria (OME); Asociación por el Derecho a la Salud (OSALDE) y Dpto. de Psicología Social, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Incomunicación y tortura: Análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul. 2014.

ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA (APT). Consideración de los informes del Examen Periódico Universal (EPU), Colombia. En: Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (24º periodo de sesiones, 9-27 de septiembre 2013). Intervención Oral. 2013.

BUENO, Gonzalo. El Concepto De Tortura Y De Otros Tratos Crueles, Inhumanos O Degradantes En El Derecho Internacional De Los Derechos Humanos. Editores del Puerto. Buenos Aires. 2003.

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “MIGUEL AGUSTÍN PRO JUÁREZ” (AC). Tortura, Represión, Discriminación Y Violaciones A Derechos Políticos En El 2001. Enero de 2002.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN POPULAR. El conflicto armado colombiano: ¿El fin del fin? Informe Especial. Bogotá D.C. 2008.

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA. Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado. Capítulo II. Bogotá D.C. 2013.

COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Boletín informativo. Bogotá. 2014.

COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bogotá. 2009.

COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Informe de Seguimiento a las recomendaciones del comité contra la tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de las Naciones Unidas, Colombia 2009-2010. Bogotá D.C. 2011.

COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA. Situación De Tortura En Colombia. Bogotá. 2014.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. Informe conjunto del Relator Especial encargado de la cuestión de la tortura, Sr. Nigel S. Rodley y del Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. Bacre Waly Ndiaye, sobre su visita a Colombia, documento E/CN.4/1995/111, 1994.

COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y SUS VÍCTIMAS. Contribución al Entendimiento del conflicto armado en Colombia. Bogotá D.C. 2015.

COMITÉ CONTRA LA TORTURA, en aplicación del Artículo 20 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: Perú, 16/05/2001, A/56/44, párr. 20.

COMITÉ CONTRA LA TORTURA. CAT/C/CR/31/1, numeral 10, literal d, apartado iii. 4 de febrero de 2004.

COMITÉ CONTRA LA TORTURA. Examen De Los Informes Presentados Por Los Estados Partes En Virtud Del Artículo 19 De La Convención: Observaciones Finales Del Comité Contra La Tortura. En: Comité Contra La Tortura, 43º período de sesiones (Ginebra, 2 a 20 de noviembre de 2009).

COMITÉ CONTRA LA TORTURA. Observación general Nº 2, párr. 3. 2007.

COMITÉ CONTRA LA TORTURA. Observación General Nº 2. 2008.

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. 44º período de sesiones (1992). Observación general Nº20: Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

COMITÉ DE SOLIDARIDAD. Encuesta. 2012.

CONSEJO EUROPEO. Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes: Informe Explicativo. Extranburgo. 1987.

CONSEJO INTERNACIONAL DE REHABILITACIÓN PARA VÍCTIMAS DE LA TORTURA (IRCT, siglas en ingles). La Evaluación Psicológica De Alegaciones De Tortura: Una Guía Práctica Del Protocolo De Estambul – Para Psicólogos. Segunda Edición. Copenhague. 2007.

COTTE POVEDA, Alexander. Una Explicación De Las Causas Económicas De La Violencia En Colombia. Bogotá: Universidad de la Salle. 2009.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe: Situación de los Derechos Humanos de los reclusos en los establecimientos de reclusión de Colombia. 2011.

FIGUEROA Ibarra, Carlos. Dictaduras, Terror y Torturas en América Latina. En: Bajo el Volcán. Vol.; 2. No.3 (jul-dic 2001). p. 53-74.

GRANAD, Soledad; RESTREPO, Jorge y VARGAS, Andrés. El agotamiento de la política de seguridad: evolución y transformaciones recientes en el conflicto armado colombiano. En: Guerra y violencias en Colombia: Herramientas e interpretaciones. Primera edición. Bogotá D.C. 2009.

GRANADOS ARGOTE, Vannesa y RODRÍGUEZ FONTECHA, María. Análisis De La Tortura Y Otros Tratos O Penas Cruelles, Inhumanos O Degradantes Desde La Perspectiva Del Derecho Internacional. Bogotá D.C., 2011, 85p. Trabajo de Investigación (Maestría En Derecho Penal Y Criminología). Universidad Libre De Colombia. Instituto De Posgrados Facultad De Derecho.

GRUPO DE MEMORIA HISTORICA. ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Informe General. Bogotá D.C. 2013.

GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL. Informe Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas presentadas por el Estado examinado, A/HRC/10/82/Add.1.

GUÁQUETA, Alexandra. Dimensiones Políticas Y Económicas Del Conflicto Armado En Colombia: Anotaciones Teóricas Y Empíricas. En: seminario: La economía política del conflicto colombiano (16 de agosto de 2002). Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

INSTITUTO NACIONAL CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE COLOMBIA. Informe: De entre muros para la libertad. 2011.

INSTITUTO NACIONAL CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE COLOMBIA.
Informe estadístico Febrero de 2015. 2015.

INSTITUTO NACIONAL CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE COLOMBIA.
Informe: Doce Pasos para hacer Frente a la Crisis del Sistema Carcelario y Penitenciario. 2013.

JIMÉNEZ BECERRA, Absalón. El Periodo De La Violencia En Colombia Y El Uso De Las Imágenes Del Terror, 1948-1965. Revista de Antropología Experimental nº 13; Texto 11 (2013).

LOPEZ PINILLA, Ana María. La tortura como noticia actual. En Derechos humanos en el ámbito internacional; Vol.1, 01(Enero-Junio 2010). p. 43-51.

MARTIN, Claudia y Rodríguez-Pinzón, Diego. La Prohibición de la Tortura y los Malos Tratos en el Sistema Interamericano. Ginebra. 2006. (ISBN 2-88477-119-0).

MENDEZ, Juan. Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. En: Consejo de Derechos Humanos 22º período de sesiones, Tema 3 de la agenda Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo (1 de febrero de 2013); Ginebra. 2013.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, REPÚBLICA DE COLOMBIA.
IV Informe Periódico De Colombia Al Comité Contra La Tortura Sobre Los Progresos En La Aplicación De La Convención Contra La Tortura Y Otros Tratos O Penas Cruelles, Inhumanos O Degradantes. Bogotá D.C. 2012.

OFICINA DE PLANEACIÓN DEL INPEC. Informe Cuadro: Total población reclusa discriminada por sexo, situación jurídica, por departamentos y regionales, Bogotá. 2003.

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Informe Centros de reclusión en Colombia: un estado de cosas inconstitucional y de flagrante violación de derechos humanos. Informe de la misión internacional: derechos humanos y situación carcelaria, 31 de octubre de 2001.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Informe Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia, Doc. E/CN.4/2000/11. 2000.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los

derechos humanos en Colombia, 28 de febrero de 2002, documento E/CN.4/2002/17. 2002.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia, 9 de marzo de 2000, documento E/CN.4/2000/11.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Informe del Relator Especial sobre la Tortura, seguimiento a las recomendaciones de la visita a Colombia en 1994, E/CN.4/1998/38. En el 54 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. 1998.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Prevención de la tortura: Guía Operacional Para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Suiza. Organización de las Naciones Unidas. Protocolo de Estambul: Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Nueva York. 2004.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA. "Colombia: Torturas y malos tratos en contra de varios soldados", Llamado urgente 230206, Ginebra, 23 de febrero de 2006.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA. Violencia Estatal En Colombia: Un Informe Alternativo Presentado Al Comité Contra Tortura De Las Naciones Unidas. Ginebra. 2004.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. El sistema de prisiones colombiano opera bajo niveles de presión crecientes; los derechos humanos de las personas privadas de libertad en riesgo. 2012.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE MÉXICO. Memoria Documental: Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de Posible Tortura y/o Maltrato. México. 2012.

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DDHH Y DIH, de la Presidencia de la República. Respuesta del director del a un oficio dirigido por la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, sobre la adopción del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, diciembre 21 de 2010, OFI 10-00120084/JMSC 34020.

PUYANA, David F. "La Noción de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Marco del Comité de Derechos Humanos y el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas." En: American University International Law Review. Vol.; 21. No.1 (2005); 101-148.

QUEVEDO-HIDALGO, Helka. Escuela de la muerte. Una mirada desde la antropología forense. En: Universitas humanística No.66 (julio-diciembre de 2008).

RED NACIONAL DE INFORMACIÓN. Reporte General Desagregado Por Hechos. Actualizado 1 noviembre 2014. Bogotá. RNI, 2014.

RED NACIONAL DE INFORMACIÓN. Unidad para la atención y Reparación Integral a las Víctimas a corte de 1 de Febrero de 2015.

RELATOR ESPECIAL SOBRE LA CUESTIÓN DE LA TORTURA. Informe sobre la cuestión de la tortura en el año 2004 E/CN.4/2004/56/Add.2 de 6 de febrero de 2004. España.

ÚBEDA-PORTUGUÉS, José Escribano. Análisis del Informe del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas de 2009 sobre Colombia. En: Reflexión Política, vol. 12., núm. 23 (junio 2010).

NORMATIVIDAD.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (DUDH). Artículo 3. Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 217 A (III), 10 de diciembre de 1948.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. Asamblea General de las Naciones Unidas. Ratificación y adhesión resolución 2200 A (XXI). 16 de diciembre de 1966.

DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. Asamblea General Naciones Unidas. 9 de diciembre de 1975.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA. Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Cartagena de Indias, 1985.

CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. Asamblea General Naciones Unidas. 26 de junio de 1987.

CONSEJO DE EUROPA. Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. 1950.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 1981.

LIGA DE LOS ESTADOS ÁRABES. Carta Árabe de Derechos Humanos. 22 de mayo de 2004, que entró en vigor el 15 de marzo de 2008.

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Constitución Política. 1991.

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 70 de 1986. 1986.

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 742 de 2002. 2002.

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 100 de 1980. 1980.

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2266 de 1991. 1991.

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 589 de 2000 “Código Penal”. 2000.

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 599 de 2000 “Código Penal”. 2000.

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 890 de 2004. 2004.

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 1015 de 2006. 2006.

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 836 de 2003. 2003.

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 734 de 2002. 2002.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Virgilio Barco Vargas. Decreto 180 de 1988. 1988.

JURISPRUDENCIA.

COMISIÓN EUROPEA. The Greek Case. Reporte 5 Noviembre de 1969, “Yearbook”, vol 12, p.186. como se citó en Bueno, Gonzalo. El Concepto De Tortura Y De Otros Tratos Crueles, Inhumanos O Degradantes En El Derecho Internacional De Los Derechos Humanos. Editores del Puerto. Buenos Aires. 2003.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 35/96, Caso 10.832 “Luis Lizardo Cabrera” (República Dominicana), 7 de abril de 1998.

COMITÉ CONTRA LA TORTURA, Comunicación N°257/2004, Kostadin Nikolov Keremedchiv c. Bulgaria. dictamen aprobado el 11 de noviembre de 2008.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia de 11 de marzo de 2005. Como se citó en: MARTIN, Claudia y Rodríguez-Pinzón, Diego. La Prohibición de la Tortura y los Malos Tratos en el Sistema Interamericano. Ginebra. 2006. Pág. 105. (ISBN 2-88477-119-0).

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Como se citó en: MARTIN, Claudia y Rodríguez-Pinzón, Diego. La Prohibición de la Tortura y los Malos Tratos en el Sistema Interamericano. Ginebra. 2006. Pág. 104. (ISBN 2-88477-119-0).

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 7 de septiembre de 2004, Caso Tibi c. Ecuador, párrafo 143.

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (TEDH), “Irlanda c. El Reino Unido”, sentencia del 18 de enero de 1978, párrafo 163. Como se citó en BUENO, Gonzalo. El Concepto De Tortura Y De Otros Tratos Crueles, Inhumanos O Degradantes En El Derecho Internacional De Los Derechos Humanos. Editores del Puerto. Buenos Aires. 2003.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-153 de 1998, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-148 de 2005. Magistrado Ponente Álvaro Tafur Galvis.